
57
BIODIVERSIDAD
SUSTENTO Y CULTURAS
El negocio de matar de hambre
QUEVEDO, ECUADOR
Oasis de organización en los desiertos del monocultivo
CONTENIDO LIBRE DE PROPIEDAD INTELECTUAL

BIODIVERSIDAD
SUSTENTO Y CULTURAS

Número 57, julio de 2008

Biodiversidad, sustento y culturas es una publicación trimestral de información y debate sobre la diversidad biológica y cultural para el sustento de las comunidades y culturas locales. El uso y conservación de recursos genéticos, el impacto de las nuevas biotecnologías, patentes y políticas públicas son parte de nuestra cobertura. Incluye experiencias y propuestas en América Latina, y busca ser un vínculo entre quienes trabajan por la gestión popular de los recursos genéticos, especialmente las comunidades locales: mujeres y hombres indígenas y afroamericanos, campesinos, pescadores y pequeños productores.
Siendo un proyecto originalmente de

REDES-AT
biodiv@redes.org.uy
GRAIN
carlos@grain.org

su publicación ahora la comparten:
Acción Ecológica:
notransgenicos@accionecologica.org
Acción por la Biodiversidad
agenciabiodla@gmail.com
Campaña de la Semilla de Vía Campesina
internacional@anamuri.cl
Grupo ETC
veronica@etcgroup.org
Grupo Semillas
semillas@semillas.org.co
Red de Coordinación en Biodiversidad
silviar@ice.co.cr

Depósito Legal núm. 340.492/07
Edición amparada en el decreto 218/996
(Comisión del Papel)
ISSN: 07977-888X

Contenido

La foto que aparece en la portada es una panorámica del pompósamente llamado "proyecto multipropósito" Baba, que además de despojar del agua a las comunidades campesinas de la provincia de Quevedo en Ecuador (86% del caudal del río Baba) inundará ("despejará" dicen los técnicos) unas mil hectáreas de tierras cultivadas. Dicho "proyecto", en realidad es parte de la enorme ofensiva agroindustrial en la región y atenta en extremo contra los enclaves campesinos de la región, que se defienden de las repúblicas privadas de empresas como Bonita (bananera) y Dole (piñera). Encima de la presa que les van a imponer la gente sufre fumigaciones, contaminación, represión y hostigamiento por parte de las agroempresas. Ésta y el resto de las fotos del número fueron tomadas por Carlos Vicente.

Las organizaciones populares y las ONG de América Latina pueden recibir gratuitamente la revista. Contactar a REDES-AT: biodiv@redes.org.uy/biodiv.suscripciones@redes.org.uy

Agradecemos el apoyo de SwedBio y de la Cooperación al Desarrollo
de la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco

Editorial

Apenas en marzo pasado, un tanto tarde, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros organismos internacionales comenzaron a divulgar la existencia de una crisis alimentaria mundial. Pero los precios de los alimentos —lácteos, carne y en especial cereales— se dispararon sin control todo 2007. La gente intentó gestionar la crisis y se apretó el cinturón hasta que no tuvo otra que salir a las calles a exigirle medidas a sus gobiernos. A principios de 2008 estallaron revueltas populares en unos cuarenta países. Las élites políticas del mundo se amedrentaron.

Sabemos cuales son las causas de tal crisis (entre ellas que el comercio de alimentos está sometido a especulación extrema). Unos intentamos entender el momento y a otros no les conviene entender. La crisis alimentaria se expande. Habrá cien millones de nuevos hambrientos. Hay gobiernos que se pelean por encontrar o manejar reservas de granos. Hay riesgo de una crisis mundial más extrema y dramática.

En respuesta, los sacerdotes del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional, los directorios de las empresas y la mayoría de los gobiernos y sus equipos asesores nos proponen continuar por el camino de la industrialización de la agricultura, la liberalización del comercio y la inversión mientras, casi en secreto y poco a poco, declaran ilegales los métodos, prácticas y relaciones agrícolas que hicieron posible producir comida durante los pasados 10 mil años. Además, prosiguen la apropiación de más y más territorios con sus tierras y sus aguas, rompen los equilibrios, devastan zonas enteras (lo que dificulta aún más que la gente asuma la solución en sus manos) y expulsan más personas a los cinturones urbanos de miseria y hambre.

Es tiempo de un cambio profundo que nos saque de la crisis alimentaria y del nudo enorme de crisis que padecemos por la globalización neoliberal: cambio climático, devastación general (biológica y social), marginación extrema, privatización de los ámbitos comunes, expulsión del campo, urbanización salvaje, delincuencia como opción desesperada.

Ya no confiamos en todos aquellos de la clase política, tecnócratas del aparato público o empresarial, científicos y extensionistas que se pliegan felices a los especuladores y empresarios que nos han llevado al desastre actual. Ellos van creando un doble hoyo negro: un vacío político (porque los gobiernos se empeñan en reducir todo lo relacionado con el interés público) y una farsa de mercado.



Plantación agroindustrial de banano, Quevedo, Ecuador.

No hay ni de lejos la pretensión de construir un sistema alimentario más sustentable y equitativo. Sólo buscan continuar con el negocio mediante más liberalización comercial, más agrotóxicos, más transgénicos y más endeudamiento. Es tabú reformular las reglas del sistema financiero o poner coto a los especuladores. Los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos y de la FAO llegan al colmo

de proponer y pactar (a coro histérico con las fundaciones Gates y Rockefeller), otra Revolución Verde siendo que las estrategias de su primera versión fueron desastrosas.

La confianza en el mercado se hizo trizas. Pero la élite política y la élite comercial prefieren no enterarse. El año pasado en Tailandia la gente ganaba unos 300 dólares por tonelada de arroz entregada a los molinos y hoy perciben unos 296 dólares. pero ¡se triplicó el precio que pagan los consumidores por ese arroz!

El dólar estadounidense (aún moneda internacional para el comercio de alimentos) se viene a pique mientras el precio del petróleo (del cual depende la producción industrial de alimentos) está por las nubes. Algunos gobiernos comienzan a sacar alimentos del mercado pues ya no confían en el modo en que se valúan en el mercado internacional. El gobierno de Malasia, por ejemplo, anunció su disposición a intercambiar aceite de palma por arroz con cualquier país que quisiera cerrar el trato. En otros países se empieza a prohibir la exportación de alimentos.

Enfrentados a la insolvencia de ideas y sistemas, no hay otro camino creíble que reconstruir desde los cimientos y emprender cambios radicales. En lo ideal, los campesinos, los indígenas, responsables de cuidar semillas, relaciones y procesos que hoy todavía permiten producir la mayor parte de los alimentos consumidos en todo el mundo, deberían ser quienes fijen el rumbo.

Son ellos quienes tienen propuestas no sólo para remontar la crisis sino para que haya un futuro. Pero es necesario que las instituciones financieras internacionales y los organismos mundiales de desarrollo dejen de tener el poder que detentan actualmente.

Muchos grupos y organizaciones locales, nacionales e internacionales de diversos estratos sociales, rurales y urbanos, ya nos exhortan enérgicamente a renovar estrategias, buscar soluciones, recuperar saberes y tradiciones, emprender relaciones diferentes entre nosotros y con la naturaleza. Resaltan tres ejes cruciales interrelacionados: tierra, mercados y la agricultura misma.

Es central el acceso de los campesinos a la tierra. Por todo el mundo, los gobiernos y las empresas insisten en el círculo vicioso de la agricultura de plantaciones en gran escala, que desplaza campesinos y desmantela su producción local de alimentos, impone un modelo agrícola orientado a exportar que crece la dependencia de las importaciones lo que mina el resto de los sistemas de producción alimentaria que urgen para salir del atolladero.

Con el aumento de precios de los productos básicos de exportación y el nuevo mercado de agrocombustibles, la especulación y la apropiación de tierras crece muy rápido.

Apropiarse tierras se vuelve oficial: Japón compró 12 millones de hectáreas en el sudeste asiático, China y América Latina, para producir alimentos destinados a Japón, lo que significa que sus cultivos en el extranjero tienen ahora el triple de espacio que en su propio territorio. Libia arrendó 200 mil hectáreas de tierras de cultivo en Ucrania para atender sus propias necesidades de alimentos y los Emiratos Árabes Unidos están comprando tierras en Paquistán con el apoyo del Islamabad. Filipinas firmó acuerdos con Pekín para permitir que empresas chinas arrendaran tierras y produjeran arroz y maíz con destino a China, lo que desencadenó una enorme protesta nacional. Las empresas chinas también adquirien derechos sobre tierras productivas en toda África y otras partes del mundo. La compra de tierras para producir alimentos que se "exportarán" a China, se convierte ya en política central y oficial del gobierno de Pekín.

La tierra [y hoy con mayor visión panorámica el territorio] siempre ha sido una demanda central de los campesinos, los pescadores tradicionales, los trabajadores rurales y los pueblos indígenas. Emprender una reforma agraria radical es una de las medidas más urgentes para que la gente pueda tener la capacidad de alimen-

tarse a sí misma y a sus comunidades —lo que sin duda revertiría la expansión de los barrios urbanos marginados, un elemento central de la crisis alimentaria. Ya es hora de tomar en serio y poner en práctica las propuestas de las organizaciones campesinas. Si no valoramos la enorme urgencia de producir nuestros propios alimentos, sea en el campo o en la ciudad, el suicidio planetario en que están embarcados los especuladores (para los que un billete fácil es más importante que el hecho de que haya gente sin mañana) nos arrastrará sin miramientos.



Máquina fumigadora de agrotóxicos, Quevedo, Ecuador.

Durante décadas, el BM y el FMI impusieron a los países pobres políticas para liberalizar el comercio y realizar "ajustes estructurales". Esas prescripciones fueron reforzadas al establecerse la OMC a mediados de los noventa y ahora con el aluvión de tratados bilaterales de libre comercio e inversión. Esto, más otras medidas, provocan el despiadado desmantelamiento de aranceles y otras herramientas que los países en desarrollo crearon para proteger su producción agrícola local. Los países son obligados a abrir sus mercados a la agroindustria mundial y a los alimentos subvencionados que los países ricos exportan. Las tierras fértiles dejan de servir a los mercados locales de alimentos por producir cultivos de exportación mundiales o cultivos fuera de estación, de alto valor para los supermercados de las grandes urbes. Numerosos países pobres se vuelven importadores netos de alimentos.

Uno de los aspectos más inmorales de la crisis alimentaria es el lucro espectacular que el mercado ha permitido que tengan las grandes agroempresas y los especuladores. Son pocos los agricultores que perciben algún beneficio por el aumento de los precios.

En el primer trimestre de 2008, mientras el hambre cundía en países ricos y pobres, las empresas obtuvieron ganancias sin precedentes en todos los eslabones de la cadena alimentaria —agroquímicos, semillas, transporte, procesado, comercio.

La mitad del trigo comercializado en la bolsa de Chicago está controlada por fondos de inversión. En la bolsa de futuros agrícolas de Tailandia, la especulación sobre el arroz ha triplicado, en un año, el número promedio de contratos diarios y los fondos de cobertura y otras especulaciones representan la mitad de los contratos diarios. Toda esta actividad especulativa está haciendo subir los precios por las nubes. Toda burbuja es inestable y está destinada a explotar, con resultados imprevisibles. Los gobiernos y los organismos internacionales, con pocas excepciones, difícilmente hablan de estas maniobras ni hay la pretensión visible de lidiar con ellas.

En contraste, los sindicatos y las organizaciones de agricultores insisten en una regulación y control adecuados, en especial porque los productores y los consumidores son los grupos más afectados. En sus reclamos de soberanía alimentaria los movimientos sociales nos urgen a dar prioridad a los mercados locales y regionales poniendo freno al dominio de los mercados internacionales y las empresas que los controlan; suspender o desmantelar el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC; mejorar la distribución de los recursos; establecer reservas estratégicas

nacionales; alentar nuevos tipos de competencia que inhiban la formación de monopolios; investigar la especulación en los mercados de básicos y adoptar medidas para controlarla.

Luego está la agricultura misma. La crisis alimentaria le da pretextos a los proponentes de la vieja Revolución Verde para pedir más de los mismos paquetes verticalistas y homogenizantes de semillas, fertilizantes y agroquímicos. No es por desabasto sino por los precios tan altos que tanta gente se ha perjudicado. Aumentar la producción no resolverá esta cuestión, si significa aumentar los costos de producción o si dicha producción, a fin de cuentas, es controlada, acaparada y mediatizada desde sus orígenes por las grandes agroempresas. ¿De qué nos sirven todos los silos atiborrados de cereales si tienden a ser transgénicos, están plagados de agroquímicos y los controlan los especuladores? (Así parece quejarse el Grupo ETC en su más reciente informe. Y su queja es pertinente en extremo.) Son necesarios entonces *otros* alimentos, unos que la gente cuide, cultive, trabaje, gestione y valore en sus propios espacios, y no los alimentos que producen en gran escala las grandes empresas ligadas a redes de todo tipo de manipulaciones que les agregan nocividad biológica y social con tal de lucrar.

Las variedades de alto rendimiento de alimentos básicos por las que tanto entusiasmo tienen el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), la FAO y la mayoría de los ministerios agrícolas, requieren más agrotóxicos basados en petróquímica, los cuales han sufrido tales alzas de precios que los colocan fuera del alcance de numerosos agricultores. Y los agroquímicos son una de las causas principales de los gases con efecto de invernadero. Es la agricultura industrial, sobre todo, la responsable de esos agrotóxicos. Echar más en suelos ya agotados, como predican los militantes de la Revolución Verde, no hará sino extremar el caos climático y la destrucción de la vida de los suelos.

Hay estudios científicos que demuestran que los métodos campesinos pueden ser más productivos y sustentables que la agricultura industrial. Con el debido apoyo, esos sistemas agrícolas locales basados en los saberes indígenas, enfocados en conservar suelos saludables y fértiles, organizados en torno a una utilización amplia de la biodiversidad disponible localmente, nos muestran formas de salir de la crisis alimentaria.

Es vital entonces comenzar a hablar con las comunidades locales de todo el mundo. Impugnar y ponerle fin a la criminalización de la diversidad, para que los agricultores puedan acceder, desarrollar e intercambiar semillas, saberes, experiencias y prácticas libremente.

Pero no podemos esperar a que los gobiernos dejen de promover a las agroempresas y a los mercados de exportación y comiencen a proteger y reverenciar las técnicas, los saberes y capacidades de los pueblos.

Es claro que quienes no somos del gobierno ni del sector empresarial necesitamos unirnos más que nunca para construir nuevas confianzas y frentes de acción, no solamente para encontrar soluciones a los problemas inmediatos de la crisis alimentaria sino para construir soluciones de largo plazo —sobre todo buscando un cambio en las relaciones entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, que ponga en primer lugar las necesidades de los sectores pobres rurales y urbanos, y el cuidado radical de nuestro futuro común. Nuestros sistemas agrícolas y alimentarios deben ser más justos, más ecológicos y verdaderamente efectivos si han de alimentar a los pueblos. Ya no podemos esperar o confiar en soluciones prefabricadas. Debemos crear esos sistemas mas justos ahora, colectivamente.

BIODIVERSIDAD

Ver una versión más larga y algo diferente en http://www.grain.org/nfg/?id=582

El negocio de matar de hambre

Privatizar la asistencia como estrategia de mercado

Hope Shand

En la Conferencia de Alto Nivel de la FAO sobre Seguridad Alimentaria Mundial, las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma anunciaron la creación de un acuerdo entre la Alianza por una Revolución Verde en África (conocida como AGRA por sus siglas en inglés), la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). AGRA es la iniciativa elefantiásica para el África subsahariana financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller. Esta nueva asociación forjada en Roma es la respuesta incorrecta a la emergencia alimentaria. Las agencias multilaterales manotean en busca de una bala mágica que haga frente a la emergencia alimentaria. Los gobiernos no están pudiendo gobernar y entonces abdican de su responsabilidad con la agricultura y el desarrollo internacional para ponerlo en manos de los filantro-capitalistas y las agroempresas.

Según la FAO, el nuevo acuerdo conjunto trabajará "de cerca con otras partes interesadas en estas áreas, consideradas graneros, para mejorar con rapidez la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y los ingresos rurales… Cada agencia brindará su experiencia singular con el fin de lograr una revolución verde ambiental y económicamente sustentable que finalice la crisis alimentaria perenne".

El acuerdo forjado entre AGRA, FAO, IFAD y el PMA promoverá soluciones de mercado para la pobreza y el hambre que provocarán nuevas dependencias hacia las semillas patentadas y los agroquímicos que promueve la agricultura industrial. Jacques Diouf, director general de FAO, dice que se trata de que la nueva alianza "desate el potencial de África". Estas dizque soluciones filantrópicas basadas en el mercado introducirán semillas de alta tecnología que vienen adosadas con leyes de propiedad intelectual, regulaciones semilleras de tipo corporativo, liberalización de comercio y otras prácticas afines a los intereses de las agroempresas.

Este proyecto minará los derechos de los campesinos y su capacidad de producir comida para sus propias comunidades.

El mismo día en que los "aliados filantrópicos" anunciaron su nuevo trato, Monsanto salió también con su boletín de prensa: una página más del mismo libro de juegos. Monsanto —la semillera más grande del mundo— responde a la crisis alimentaria con un oportunismo de relaciones públicas que busca empujar a los agricultores y a los renuentes consumidores a que acepten semillas genéticamente modificadas. En su oferta —que busca legitimar moralmente las controvertidas semillas GM—, Monsanto alega que mejorará la vida de los pequeños propietarios y los campesinos de escasos recursos "compartiendo su experiencia de modo que les brinde acceso a la moderna tecnología agrícola". Monsanto presume de inmediato que se ha unido con la Fundación Gates y el CIMMYT para desarrollar semillas tolerantes a las sequías. Unilateralmente, Monsanto y su socio agroquímico, BASF, "donarán" a los países africanos pobres genes tolerantes a la sequía.



Monocultivo de piña, Quevedo, Ecuador.

Bajo su disfraz filantrópico, el fin último es forzar la apertura de nuevos mercados para las semilleras multinacionales —antes que los campesinos africanos y los consumidores puedan tomar sus propias decisiones acerca de las semillas GM. No debemos olvidar que el negocio de Monsanto es vender semillas patentadas para la agricultura industrial —no la filantropía. Las semillas genéticamente modificadas por Monsanto no han resultado de utilidad para las necesidades de los campesinos. Las estadísticas de la

industria muestran que 80% del área mundial dedicada a cultivos transgénicos está plantada con variedades tolerantes a herbicidas diseñadas para aguantar una verdadera tormenta de matayerbas químicos. Nada tienen que ver con aumentar rendimientos, acentuar lo nutritivo o resistir enfermedades. Monsanto y BASF cuenta ya con cientos de patentes y solicitudes de patentes para genes "adaptados" a los climas. Pero tales remedios tecnológicos patentados no brindan las estrategias de adaptación que los campesinos necesitan para lidiar con el cambio climático. Estas tecnologías privadas concentrarán todavía más el poder de las corporaciones, aumentarán los costos, inhibirán la investigación independiente y erosionarán aun más el derecho que tienen los agricultores de guardar e intercambiar sus propias semillas.

El 5 de junio, una nota de Diana B. Henriques en el *New York Times* informa de sucesos relacionados. Las compañías privadas se avorazan por las lucrativas oportunidades de inversión, no sólo en el mercado de exportaciones agrícolas: también es tierra de cultivo, fertilizantes, silos y equipo de embarque. "Food is Gold, so Billions Invested in Farming" explica que los operadores de fondos de resguardo y las firmas de inversión esperan lucrar con la actual crisis alimentaria. Por ejemplo, Emergent Asset Management, con sede en el Reino Unido, reúne entre 450 millones y 750 millones de dólares para invertirlos en tierras productivas e introducir mejor equipo. Un representante de Emergent le dijo al *New York Time* que el fondo escogió África porque "la tierra es muy muy barata, comparada con otras economías agrícolas… sus microclimas son fabulosos pues permiten un rango de diversos cultivos. Hay una mano de obra accesible. Y muy buena logística —caminos amplios, buen transporte por camiones y transporte marítimo".

No deberían determinar la agenda de investigación agrícola unas cuantas corporaciones semilleras, biotecnológicas y agroquímicas que los gobiernos, que no pueden gobernar, invitaron. Las agencias de Naciones Unidas en alimentos y agricultura, los filatrocapitalistas y las corporaciones transnacionales inundan de dinero el África subsahariana para imponer masivos ajustes estructurales en la agricultura —sin hablar siquiera con los campesinos africanos y sus organizaciones. Los organismos intergubernamentales con sede en Roma (y los gobiernos que los "gobiernan") fracasarán porque ignoran el principio más fundamental: los campesinos deben ser los principales arquitectos y actores en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en África.

Hope Shand es investigadora del Grupo ETC

El negocio de matar de hambre

Adiós al factor China

Alejandro Nadal

Para explicar el alza de los precios de alimentos se ha recurrido a varios factores. Entre las razones que se mencionan, siempre destaca el *factor China*.

La historia es sencilla: el aumento de la demanda en China afecta la dinámica de precios, no sólo por el crecimiento demográfico, sino porque la clase media ascendente ahora consume más carne. Como se necesitan 700 calorías de alimento en grano para producir 100 calorías de carne de res, este cambio de dieta presiona fuertemente el mercado.



Hasta Paul Krugman, tan admirado por los lectores de *The New York Times*, abraza esta "explicación" y coloca la demanda china como principal causa del aumento de precios. Pero el famoso economista no hizo bien la tarea.

Daryll Ray, investigador de la Universidad de Tennessee, sí ha revisado los números y éstos son sus hallazgos: primero, entre 1990 y 2007 la demanda de carne de res pasó de 1.1 a 7.4 millones de toneladas, pero China cubrió ese incremento con producción doméstica y hasta exportó pequeños excedentes.

El consumo de carne de cerdo aumentó de 23 a 45 millones de toneladas entre 1990 y 2007, pero China fue autosuficiente y siguió exportando. Finalmente, el consumo de carne de pollo pasó de 2.4 a 11.5 millones de toneladas entre 1990 y 2007: China fue autosuficiente, aunque en 2007 importó una modesta cantidad (124 mil toneladas).

Así, entre 1990-2007 su demanda de cárnicos creció 142%, pero se cubrió con producción interna y se exportaron excedentes. Ese factor no constituye una presión adicional sobre el mercado internacional de cárnicos.


En el vergel de una finca campesina arrinconada entre plantaciones agroindustriales, Quevedo, Ecuador.

¿Y en el caso de los granos? Veamos el arroz. Entre 1990 y 1999 el consumo pasó de 124 a 134 millones de toneladas; la producción mantuvo el ritmo y China continuó exportando. Después de 2000 la producción doméstica fluctuó, pero siguió cubriendo la creciente demanda y generando excedentes. Hubo incrementos en la superficie cultivada para este grano, lo que permitirá hacer frente a la demanda y seguir exportando.

China cubre su consumo interno de maíz y es un exportador importante (en 2005 exportó 3.5 millones de toneladas). Para el trigo, en los años 90 la demanda interna pasó de 102 a 109 millones de toneladas. Aunque eso pudo cubrirse con rendimientos crecientes, aumentó sus reservas con importaciones. A partir de 2000 reduce la producción interna y recurre a sus reservas de trigo para cubrir la demanda. Sin embargo, desde 2005 la superficie cultivada y la producción interna aumentaron nuevamente y China volvió a exportar trigo.

Esto revela una interesante política de manejo de reservas. En los noventa, probablemente por la experiencia histórica de numerosas hambrunas, China mantuvo reservas muy altas. Pero en los últimos diez años una parte de su demanda se cubrió con esas gigantescas reservas. Por eso los datos mundiales no revelan un incremento, sino una disminución en la demanda internacional de granos en ese periodo. Hasta aquí los números de Daryll Ray.

Tenemos un dato muy importante: China, lejos de provocar un aumento en la demanda mundial, es responsable de una *reducción* debido a su manejo de inventarios. Eso sí que choca con el comportamiento de los precios, ¿verdad?

No cabe duda, hay que despedirse del *factor China* como explicación del aumento. Y dado que los otros factores que mencionan los medios (agrocombustibles, precios de petróleo y sequías en algunas regiones) no sirven por sí solos para dar cuenta de los incrementos espectaculares en el costo de los alimentos, hay que seguir buscando.

No hay que ir muy lejos: la concentración del mercado mundial de granos, carne, semillas e insumos agrícolas es la pista más prometedora. Hoy, conglomerados como Archer Daniels, Cargill, Bunge, Monsanto y Syngenta tienen el poder de mercado y la infraestructura para manejar inventarios, invertir en mercados de futuros y manipular precios a escala mundial para obtener súperganancias. Pero ni la OMC ni la FAO están interesadas en remediar esta situación.

En el plano nacional sucede lo mismo: deficiente política agrícola, mala gestión de inventarios y poder de mercado de grandes consorcios. Eso explica el incremento de precios. Pero el gobierno no quiere perturbar a sus amigos. Es mejor propalar las mentiras sobre el *factor China*.

Tomado de *La Jornada*, México 11 de junio

Distracciones

Juan Gelman

Se dijo de todo para explicar la crisis alimentaria que amenaza con elevar ya a casi mil millones el número de quienes se mueren de hambre en el planeta. Sucedió en la reunión de la FAO en Roma, y en la que 193 naciones del mundo lanzaron gritos de alarma ante lo que se viene. En realidad ya vino, pero hace más de veinte años que los gestores del mundo globalizado globalizan sistemáticamente el hambre y al parecer se distrajeron. En las reuniones de los países más industrializados, los del grupo G-8, el tema del hambre apenas merecía una mención trivial. Hoy causa un repentino nerviosismo y Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, fue claro: "No podemos fracasar [en resolver el problema]. Es una lucha que no podemos perder; el hambre crea inestabilidad y tenemos que reaccionar unidos e inmediatamente". No hay compasión, hay miedo.

En 2007, el precio del arroz, los frijoles y la fruta subió 45% en el mercado interno de Haití y a fines de marzo pasado se elevó la espiral. El 3 de abril, en la ciudad portuaria de Les Cayes, más de tres mil manifestantes levantaron barricadas en las calles, bloquearon a los camiones que transportaban arroz, distribuyeron el producto y trataron luego de incendiar una instalación de las fuerzas de paz de la ONU a cargo de tropas uruguayas que abrieron fuego contra la multitud. Resultado: cuatro muertos y veinte heridos. Las protestas se extendieron a la capital, Port-au-Prince, donde miles de personas marcharon hacia el palacio presidencial al grito de "¡Tenemos hambre!", exigieron la retirada de las fuerzas de la ONU y el regreso del presidente Jean-Bertrand Aristide, que un golpe de Estado marca USA derrocó en 2004. El primer ministro Jacques Edouard Alexis aclaró las cosas: era una manifestación infiltrada por narcos y otros contrabandistas. El precio del arroz no estuvo allí.

Hubo de lo mismo en más de veinte países del llamado Tercer Mundo. A fines de 2007, la policía de Dakar no vaciló en apalear y gasear a miles de senegaleses que reclamaban comida. En febrero de 2008, los sindicatos y pequeños comerciantes de Burkina Faso realizaron una huelga de dos días exigiendo la rebaja del precio del arroz y otros alimentos, que habían aumentado del 10 al 65%. Más de cien detenidos, claro. En Bangladesh, unos 20 mil obreros textiles de Fatullah, localidad cercana a Dhaka, la capital, fueron a la huelga por mayores salarios: la bolsa de dos kilos de arroz equivale a medio día de salario. Por la misma demanda fueron reprimidos los trabajadores del complejo textil de Mahalla, en el delta del Nilo: el gobierno egipcio envió miles de tropas para impedir la huelga, hubo dos muertos y alrededor de 600 detenidos. La lista sigue. En Costa de Marfil, Paquistán, Tailandia, Camboya, Etiopía, Níger, Perú, Honduras, Zambia y otros se presenciaron —y reprimieron— movimientos semejantes. El FMI, que tanto contribuye a esta grave crisis imponiendo "reformas estructurales" a los países pobres, parece algo asustado: su director ejecutivo, Dominique Strauss-Kahn, advirtió a los gobiernos que "verán la destrucción de todo lo que hicieron y también de su legitimidad ante la población. No se trata sólo una cuestión humanitaria —agregó sin reparo alguno—, tampoco sólo de una cuestión económica, es además una cuestión de democracia", es decir, de mantener el sistema que hambrea. Según Elías Antonio Saca, presidente de El Salvador, país que también sufre lo suyo: "Es una tormenta escandalosa que se puede convertir en huracán y trastornar nuestras economías y también la estabilidad de nuestros países". Estabilidad, palabra santa.

Hay 2 600 millones de personas en el mundo que ganan menos de dos dólares por día y alimentarse les comería, según el país, hasta el 80% de sus ingresos. De manera que no comen o comen de manera insuficiente, su rebeldía es concreta como una piedra y los enormes intereses que manejan el precio de los cereales conocen el temor: "La idea de que las masas hambrientas, llevadas por su desesperación, tomaran las calles para derribar al *ancien régime* parecía definitivamente exótica dado que el capitalismo triunfó de manera terminante en la Guerra Fría", señala el conocido periodista Tony Karon en "Cómo el hambre puede derrocar regímenes". Y agrega: "Sin embargo, los titulares del mes pasado sugieren que el abrupto aumento del precio de los comestibles amenaza la estabilidad de un número creciente de gobiernos en todo el mundo... cuando las circunstancias tornan imposible alimentar a los hijos, ciudadanos normalmente pasivos pueden convertirse rápidamente en militantes que no tienen nada que perder". En efecto, el hambre es una forma aguda de terrorismo.

Versión completa en http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-105644-2008-06-08.html

El principal problema ambiental que padecemos es el capitalismo

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, insiste en dar palos de ciego llamando al mundo a "aumentar un 50% la producción de alimentos hacia 2030 para paliar la crisis alimentaria mundial". Sus palos no son de ciego sino de tuerto, porque siempre van para el mismo lado. El Banco Mundial advirtió que [además de los 850 millones de personas que viven con hambre, de las cuales más de la mitad son niñas y niños] otros 100 millones de seres humanos corren riesgo inminente de sumarse a las huestes de famélicos.

Ban Ki Moon sabe —debería saber— que el hambre en el mundo no es causado por la escasez. Nadie ve aglomeraciones o largas filas en las puertas de los supermercados, de los almacenes minoristas de los barrios o a la entrada de las ferias vecinales, allí donde se venden los alimentos. Las aglomeraciones de los empobrecidos están en los cinturones de las ciudades y los pueblos, donde lo único que se puede acumular son hijos y sueños castrados. Las largas filas están, sí, en las puertas de las fábricas, de los comercios, de las plantas industriales y agroindustriales, donde existe una expectativa de empleo aunque sea efímero, aunque sea semiesclavo, aunque sea inhumano.

Ban Ki Moon asume los intereses de los sectores más opulentos del planeta, y usando un tono que podría ser asimilado por los incautos a una protesta, reclama más de lo mismo, mucho más.

La naturaleza del capitalismo produce este tipo de cinismos, más aún, no podría existir sin ellos. La historia está repleta de ejemplos: en 1621, más de cien años antes de la Revolución Industrial, los nativos wampanoag salvaron de la muerte por inanición a los primeros colonos ingleses desembarcados del Mayflower en las costas de Massachusetts, compartieron con ellos sus reservas de alimentos para el invierno, les enseñaron a cazar pavo silvestre y los dotaron de semillas nativas.

Apenas cincuenta años después sólo quedaban vivos 400 wampanoag, exterminados por las sucesivas olas de inmigrantes provenientes de los mismos países europeos que hoy criminalizan a los refugiados del hambre transformados en inmigrantes clandestinos, sombras humanas de los arrabales de Londres, Madrid, Roma, París o Berlín.

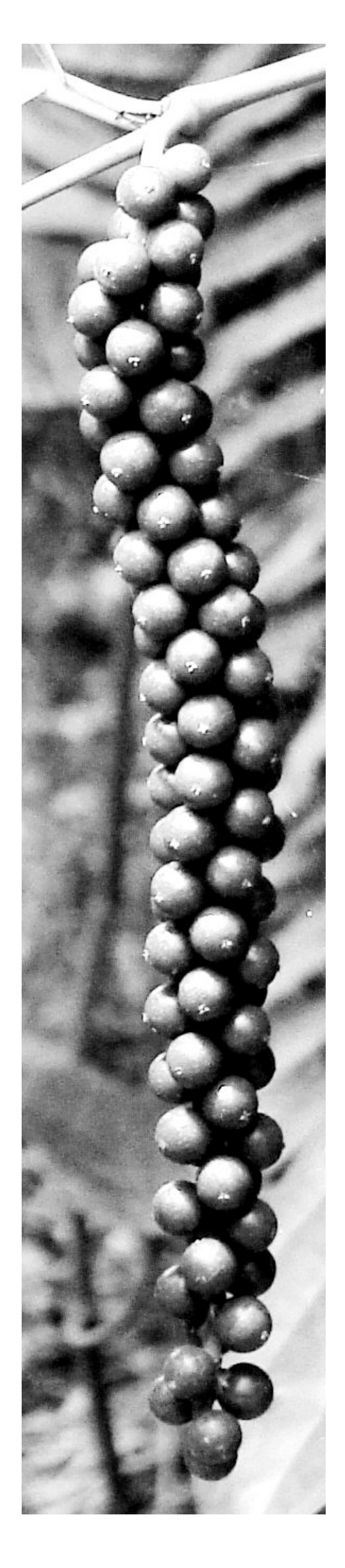
Ban Ki Moon hace propuestas, pero envenenadas, y exige "el aumento de la asistencia a través de la ayuda en comida, vales o dinero". Nadie ha olvidado que en 2002, cuando en varios países del sur de África se producía una escasez severa de alimentos, los mismos hambrientos rechazaron la "ayuda" alimentaria que consistía, nada más y nada menos, que en los excedentes de maíz transgénico que el gobierno de Estados Unidos compra a precio de oro a sus granjeros subvencionados.

Los Ban Ki Moon del mundo, y sus mandantes, quieren convencernos de que los alimentos no alcanzan porque los que antes no comían ahora empiezan a hacerlo —como China e India—, pero también nos dicen que habrá cada vez más famélicos. El mensaje implícito es que los pobres les quitan la comida a los más pobres.

Empachados de poder y frivolidad, de consumo innecesario y vanidad, de lujo y despilfarro, de egoísmo e insignificancia Europa prodiga más de mil millones de dólares diarios en subsidios agrícolas y en 2005 Estados Unidos gastó más de 500 mil millones de dólares sólo en armamentos, un rubro en el cual ese año el planeta decidió despilfarrar más de un billón (esto es, un millón de millones) de dólares.

Carlos Amorín

Ver el texto íntegro en www.biodiversidadla.org/content/view/full/41657



Es necesario cambiar la política alimentaria ¡YA!

GRAIN

¿Auge de precios? No. ¿Escasez de alimentos? Tampoco. Es un colapso estructural, consecuencia directa de treinta años de globalización neoliberal.

Menos de la mitad de la producción mundial de granos es consumida por las personas. La mayor parte es para consumo animal y cada vez más para biocombustibles —en las inflexibles cadenas industriales.

Abril de 2008. Hace varios meses que el alza del costo de los alimentos en todo el mundo se abate sobre familias, gobiernos y medios de comunicación. El trigo aumentó su precio 130% en el último año. El del arroz se duplicó en Asia, tan sólo en los últimos tres meses, y alcanzó aumentos récord en el mercado de entregas diferidas o "de futuros" en Chicago. El aumento rampante de aceite comestible, frutas y verduras, lácteos y carne, provocó un menor consumo casi todo 2007. De Haití a Camerún pasando por Bangladesh, la gente se lanza a las calles con rabia de no poder comprar la comida que necesita. Ante el temor de agitación política algunos líderes mundiales reclaman más ayuda alimentaria, más fondos y tecnología para aumentar la producción agrícola. Los exportadores de cereales cierran sus fronteras para proteger sus mercados internos, mientras otros se ven forzados a comprar por el pánico a la escasez. ¿Auge de precios? No. ¿Escasez de alimentos? Tampoco. Es un colapso estructural, consecuencia directa de treinta años de globalización neoliberal.

En 2007, hubo en todo el mundo una producción récord de 2 300 millones de toneladas de granos, un 4% más que en 2006. Desde 1961, la producción mundial de cereales se ha triplicado, mientras que la población se duplicó. Se produce suficiente cantidad de alimentos en el mundo aunque las reservas estén en el nivel más bajo de los últimos treinta años.

Sin embargo, no llegan a quienes los necesitan. Menos de la mitad de la producción mundial de granos es consumida directamente por las personas. La mayor parte es para consumo animal y cada vez más para biocombustibles —en las inflexibles y enormes cadenas industriales. Traspasada la fría cortina de las estadísticas, algo entonces está muy mal con nuestro sistema alimentario: permitimos que los alimentos sean transformados a simple mercancía para la especulación y el regateo. Es muy obvia la ganancia de los inversionistas por encima de lo que necesita la gente.

Las realidades del mercado. Los promotores de las políticas que modelaron el actual sistema mundial alimentario



Monocultivo de piña, Quevedo, Ecuador.

Página siguiente, lavado de cacao "de aroma" en una finca campesina, Quevedo, Ecuador.

—y que tendrían que ser responsables de evitar tales catástrofes— dan explicaciones sobre la crisis muy sobadas: la sequía y otros problemas que afectan las cosechas, el aumento de la demanda en China e India donde la gente parece alimentarse más y mejor, grandes cultivos y enormes tierras se destinan a los agrocombustibles. Y no hay duda que los especuladores inflan los precios. Todo esto contribuye a la actual crisis alimentaria pero no es suficiente para explicar su profundidad. Hay algo más importante detrás. Algo que une todos estos temas y que los popes del mundo de las finanzas y el desarrollo mantienen fuera de la discusión pública.

Ya no es posible ocultar que la actual crisis alimentaria resulta de tanto presionar hacia el modelo agrícola de la "Revolución Verde" desde 1960 y de la liberalización del comercio y las políticas de ajuste estructural impuestas a los países pobres por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a partir de 1970. Recetas que fueron reforzadas a mediados de los noventa por la Organización Mundial del Comercio y, en fechas más recientes, mediante un fárrago de acuerdos bilaterales de libre comercio e inversión —y que desmantelaron de modo implacable los aranceles y otros instrumentos con que los países en desarrollo protegían su producción agrícola local—, y los forzaron a abrir sus mercados y tierras a la agroindustria global, a los especuladores y a las exportaciones de alimentos subsidiados procedentes de los países ricos. En el proceso, las tierras fértiles fueron reconvertidas de producir alimentos para abastecer un mercado local, a producir bienes de consumo mundiales para exportación o cultivos fuera de temporada y/o de alto valor para los supermercados occidentales. Hoy, 70% de los llamados países en desarrollo son importadores netos de alimentos. De los 845 millones de personas con hambre en el mundo, 80% son campesinos o pequeños productores. La readecuación del crédito y de los mercados financieros para crear la enorme industria de la deuda, sin control sobre los inversionistas, extremó el problema.

La política agrícola no busca alimentar a la gente. El hambre hiere y la gente desespera. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas calcula que hay unas 100 millones de personas adicionales que ya no pueden pagar sus alimentos por la espectacular alza de precios. Los gobiernos intentan, desesperados, cómo protegerse. Los afortunados con existencias para exportar se retiran del mercado mundial para deslindar sus precios internos de los astronómicos precios internacionales. La prohibición de exportar trigo o las restricciones aplicadas en Kazajastán, Rusia, Ucrania y Argentina, significan que un tercio del mercado mundial fue clausurado. Con el arroz es aún peor. China, Indonesia, Vietnam, Egipto, India y Camboya han prohibido o restringido las exportaciones, dejando pocas fuentes de suministro para exportar. Países como Bangladesh ni siquiera pueden comprar el arroz que necesitan debido al alto precio. Después de que por años el Banco Mundial y el FMI aconsejaran a los países que un mercado liberalizado les aportaría mayor eficiencia en la producción y distribución de alimentos, los países más pobres se encuentran inmersos en una intensa puja contra especuladores y comerciantes, que gozan de una verdadera época de bonanza. Los fondos de cobertura y otras fuentes de fondos especulativos vuelcan miles de millones de dólares a las llamadas *commodities,* para escapar de los resbaladizos mercados de valores y la contracción del crédito. Las existencias de alimentos se alejan del alcance de los pobres.

Según algunos cálculos, los fondos de inversión controlan ahora entre 50% y 60% del trigo comercializado en los más grandes mercados mundiales. Se calcula que los montos en la especulación de las entregas diferidas de exportaciones —mercados donde no se compra o vende un artículo tangible, como arroz o trigo, sino donde sólo se le apuesta a la variación del precio— trepó de 5 mil millones de dólares en



Hoy, 70% de los países en desarrollo son importadores netos de alimentos. De los 845 millones de personas con hambre en el mundo, 80% son campesinos o pequeños productores. La política agrícola no busca alimentar a la gente. El hambre hiere y la gente desespera.

El sistema alimentario industrial promueve que los suelos sean drogadictos de fertilizantes químicos. Necesitan más y más del químico para mantenerse vivos, lo que los erosiona, destruyendo su potencial de lograr rendimientos.

2000 a 175 mil millones de dólares en 2007.

La situación es insostenible y nada accidental. Miren a Haití. Antes era autosuficiente en arroz. Pero las condiciones de los préstamos externos, en particular un programa del FMI de 1994, lo forzó a liberalizar su mercado. Estados Unidos inundó Haití con arroz barato, con el apoyo de subsidios y corrupción, y la producción local quedó devastada. Los precios del arroz aumentaron 50% en un año, y el haitiano medio no puede pagarlo. Ahora salen a la calle o arriesgan su vida en los viajes en bote a Estados Unidos. Las protestas por la crisis alimentaria también proliferan en África Occidental, de Mauritania a Burkina Faso. También allí los programas de ajuste estructural y el *dumping* de la ayuda alimentaria destruyeron una larga historia de producción regional de arroz, dejando a la gente a merced del mercado internacional. En Asia, el Banco Mundial le remachó a Filipinas que la autosuficiencia en arroz era innecesaria, que el mercado mundial se haría cargo de sus necesidades. Ahora el gobierno está en situación desesperada: las reservas nacionales de arroz subsidiado casi se agotaron, y no puede cubrir sus pagos por importaciones ya que los precios que exigen los comerciantes son demasiado altos.

Fumigación aérea con agrotóxicos sobre grandes extensiones de monocultivo de piña, Quevedo, Ecuador.



Aumento de ganancias de algunas de las principales empresas de fertilizantes del mundo

Compañía	Ganancias 2007 en millones de dólares	Aumento con respecto a 2006
Potash Corp (Canadá)	1 100	72%
Yara (Noruega)	1 116	44%
Sinochem (China)	1 100	95%
Mosaic (EUA)	708	141%
ICL (Israel)	535	43%
K+S (Alemania)	420	2.8%

Fuente: Resumen de los informes de las corporaciones

El crimen de especular con el hambre. Nunca como ahora es tan obvia la cruda verdad de quién se beneficia en el sistema alimentario mundial. Tomemos el elemento más básico de la producción agrícola: el suelo. El sistema alimentario industrial promueve que los suelos sean drogadictos de fertilizantes químicos. Necesitan más y más del químico para mantenerse vivos, lo que los erosiona, destruyendo su potencial de lograr rendimientos. Entre 1992 y 2003, el uso de fertilizantes aumentó 3% anual en la región Asia-Pacífico, mientras que el rendimiento del principal cultivo al cual se aplicaron, el arroz, sólo creció un 0.7% anual. En el contexto actual de ajustadas existencias de alimentos, la pequeña camarilla de empresas que controlan el mercado mundial de fertilizantes puede cobrar lo que quiera —y eso es exactamente lo que hace. Las ganancias de Mosaic Corporation, empresa de Cargill que controla gran parte de la oferta de potasa y fosfato, aumentaron más del doble el año pasado. La mayor empresa productora de potasa del mundo, Potash Crop, de Canadá, ganó más de mil millones de dólares, lo que equivale a más de 70% con relación a 2006. Enfrentados al pánico de la crisis mundial, los gobiernos desesperan por aumentar sus cosechas, con lo cual le dan a esas empresas la potestad de subir sus precios. En abril de 2008, la filial comercial dislocada de Mosaic y Potash aumentó los precios de la potasa en 40% para los compradores del sudeste asiático y en 85% para los de América Latina. India tuvo que pagar 130% más que el año pasado. China se llevó la peor parte, fustigada con un alza de un 227% en su cuenta de fertilizantes con respecto al año anterior.

Si bien es desmedido el lucro con los fertilizantes, para Cargill es tan sólo un negocio secundario. Sus mayores ganancias provienen del comercio mundial de exportaciones agrícolas, que mono-

poliza junto con algunas otras empresas gigantes. En abril, Cargill anunció que las ganancias que obtuvo por dichas exportaciones en el primer trimestre de 2008 aumentaron 86% con respecto al mismo periodo el año anterior. Greg Page, presidente de Cargill y uno de sus principales ejecutivos declaró: "Los aumentos de los precios están alcanzando nuevas marcas y los mercados son volátiles en extremo".

Con su posición casi monopólica y un equipo mundial de analistas, Cargill tiene las dimensiones de un organismo de las Naciones Unidas. En realidad, todos los grandes comerciantes de granos están logrando ganancias récord. Bunge, otro gigante de los alimentos, tuvo en el último trimestre fiscal de 2007 un aumento en sus ganancias de 245 millones de dólares, o 77%, con respecto al mismo periodo el año anterior. ADM, el segundo mayor comerciante de granos del mundo, logró aumentar 65% en sus ganancias de 2007, llegando a un récord de 2 200 millones de dólares. Charoen Pokphand Foods, de Tailandia, importante empresa asiática anuncia este año un aumento impresionante de sus ingresos, que calcula en 237%.

Las grandes procesadoras mundiales de alimentos, algunas de las cuales comercializan, también se llenan los bolsillos. Las ventas mundiales de Nestlé crecieron 7% el año pasado. "Lo vimos venir, así que nos protegimos comprando materias primas por anticipado", dice François-Xavier Perroud, vocero de Nestlé. Los márgenes suben también en Unilever. "Las presiones aumentan radicalmente, pero logramos compensarlas con medidas en los precios adoptadas oportunamente", dice Patrick Cescau, del Directorio de Unilever. "No sacrificaremos nuestros márgenes ni nuestra participación en el mercado". Las empresas de alimentos no parecen sacar su tajada a costa de las grandes empresas de venta al público. El rey de los supermercados del Reino Unido, Tesco, aumentó sus ganancias 12.3% con respecto al año anterior. Otros grandes almacenes, como Carrefour de Francia y Wal-Mart de Estados Unidos, dicen que las ventas de alimentos son el principal factor que incrementa sus ganancias.

Aumento de ganancias de algunos de los principales comerciantes mundiales de granos

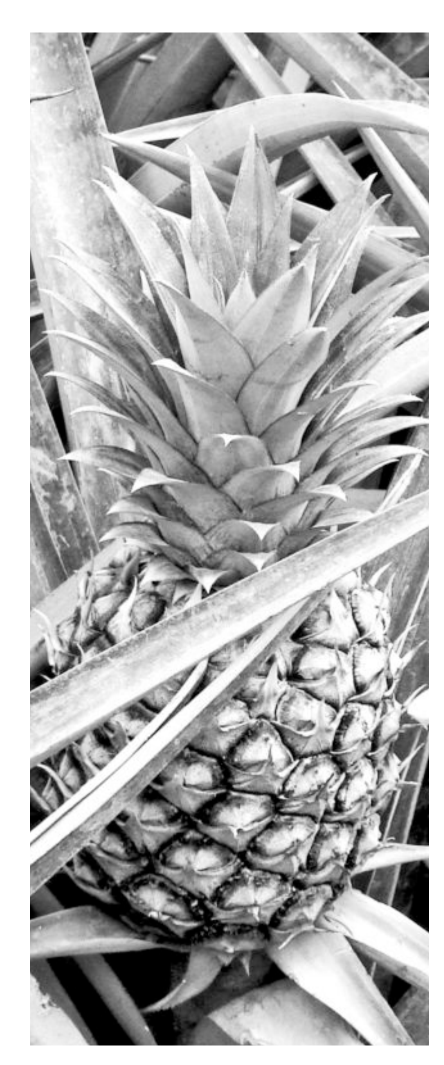
Compañía	Ganancias 2007 en millones de dólares	Aumento con respecto a 2006
Cargill (Canadá)	2 340	36%
ADM (EUA)	2 200	67%
ConAgra (EUA)	764	30%
Bunge (EUA)	738	49%
Noble Group (Singapur)	258	92%
Marubeni (Japón)	90*	43%*

Fuente: Resumen de los informes de las corporaciones.
* Los datos son de la división agromarina de Marubeni, solamente.

La división mexicana de Wal-Mart, Wal-Mex, que maneja un tercio del total de ventas de alimentos en México, informó de un aumento del 11% en sus ganancias para el primer trimestre de 2008, mientras la gente hace manifestaciones callejeras porque ya no puede costearse las tortillas.

Casi todos las empresas de la cadena mundial de alimentos están ganando una fortuna con la crisis. A las compañías de semillas y agroquímicos también les va bien. Monsanto, la mayor semillera del mundo, declaró que sus ganancias aumentaron 44% en 2007 con respecto al año anterior. DuPont, la segunda semillera mundial, aumentó sus ganancias por la venta de semillas en 2007 19% con relación a 2006, mientras Syngenta, la empresa número uno en plaguicidas y número tres de semillas, obtuvo 28% más de ganancias en el primer trimestre de 2008.

Esos récords no tienen nada que ver con algún valor nuevo que produzcan esas empresas ni son ganancias inesperadas recibidas de algún brusco cambio de la oferta y la demanda. Reflejan el poder extremo que las intermediarias han acumulado con la globalización del sistema alimentario. Íntimamente vinculadas con la formulación de las normas de comercio que rigen el sistema alimentario actual y con un estrecho control de los mercados y los complejos sistemas financieros con los que opera el comercio mundial, tales empresas están en la perfecta posición para convertir la escasez de alimentos



Esos récords en los aumentos de los precios no tienen nada que ver con algún valor nuevo que produzcan esas empresas ni son ganancias inesperadas recibidas de algún brusco cambio de la oferta y la demanda. Reflejan el poder extremo que las intermediarias han acumulado con la globalización del sistema alimentario.

en pingües ganancias. La gente tiene que comer, cueste lo que cueste.

La imperiosa necesidad de cambiar las políticas. El trasfondo de esta perversión del mercado de alimentos es el sistema financiero mundial, que hoy se tambalea en su endeble eje. Lo que en 2007 comenzó como crisis localizada de préstamos hipotecarios en Estados Unidos, se manifiesta ahora tan fuerte que tomamos conciencia de que la economía mundial vive con base en una deuda que nadie puede pagar. Mientras los banqueros y los ejecutivos del más alto nivel improvisan parches para revertir la desconfianza, el sistema está en bancarrota y nadie en el poder parece querer asumirlo. Ni el FMI, ni el Banco Mundial, ni los líderes de las naciones más poderosas.

Ya van muchos años que una élite ideológica obligó a nuestros países a abrir sus mercados y dejar que rija el libre mercado, para que unas cuantas megaempresas, los inversionistas y especuladores, hagan mucho, mucho dinero. Al causar tantos estragos en el centro mismo de nuestras necesidades más básicas —alimentarnos—, el neoliberalismo, promotor de la corrupción galopante que azota los sistemas comerciales, pierde toda legitimidad. Lo más aberrante es que, como solución a la crisis alimentaria, muchos de sus ideólogos comienzan a reclamar mayor liberalización del comercio, y llegan a proponer que se cambien las normas de la OMC para impedir que los países restrinjan las exportaciones de alimentos.



El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, intentó convencer al mundo con su exhortación a un "Nuevo Acuerdo" para resolver la crisis alimentaria. Pero el sonsonete de sus relaciones públicas, replicado con entusiasmo por otros organismos representa más liberalización del comercio, más tecnología y más "ayuda". La crisis alimentaria actual es producto directo de años de esas políticas, y ya debemos erradicarlas.

Es necesario aplicar medidas inmediatas para bajar los precios de los alimentos y hacer que éstos lleguen a quienes los necesitan. Es imperioso dar un giro radical en la política agrícola para que los campesinos de todo el mundo tengan acceso a la tierra y puedan vivir de ella. Necesitamos políticas que apoyen y protejan a los agricultores, pescadores y otros sectores que producen alimentos para sus familias, para los mercados locales y para la gente de las ciudades, en lugar de un abstracto mercado internacional de productos agrícolas y un minúsculo clan de ejecutivos de empresas. Hay que fortalecer y promover el uso de tecnologías y saberes bajo el control de quienes saben cómo hacer crecer los alimentos: las comunidades locales. Necesitamos soberanía alimentaria ya, una definida y dirigida por los propios campesinos y agricultores en pequeño y los pescadores.

En todo el mundo hay movimientos sociales que desde siempre luchan por promover ese cambio de estrategia, pero no se les escucha y se les califica de obsoletos (cuando no son reprimidos violentamente) por quienes detentan el poder. Las organizaciones campesinas tienen propuestas concretas de lo que se requiere para resolver la crisis en sus países y los gobiernos deberían escuchar lo que proponen. Algunos gobiernos ya trabajan en la reformulación de sus políticas agrícolas hacia la autosuficiencia. Otros comienzan a cuestionar el argumento fundamental de impulsar una mayor libertad de comercio. Los especuladores que están en el vértice de la pirámide de la política alimentaria mundial ya perdieron su credibilidad. Es hora de que salgan del camino para que las visiones de soberanía alimentaria y reforma agraria, que surgen de la gente común, nos saquen de este lío infernal.

Versión abreviada del texto de GRAIN, "El negocio de matar de hambre". Su versión completa, con tablas, citas y referencias puede hallarse en http://www.grain.org/articles/?id=40


República del banano monocultivado, Quevedo, Ecuador.

El negocio de matar de hambre ▸

Los nuevos especuladores

Luis E. Sabini Fernández

Pocas veces se ve tan claramente el papel parásito del mundo financiero sobre las actividades económicas, sobre la elaboración de productos que los humanos necesitamos para vivir, sobre los alimentos, nada menos.

Los analistas vernáculos, al menos los mediáticos, cogidos en un provincianismo que se pretende cosmopolita, recitan como un mantra que el arroz, el trigo, la carne, se encarecen por el ascenso del consumo en centenares de millones de chinos e indios, atienden a sequías e inundaciones que dudosamente satisfacen una explicación (porque existieron siempre y en el mercado mundial en general se compensan) o remiten al aumento del precio del petróleo con lo cual uno a veces se ve tentado a creer que están empeñados en desviar la mirada de lo verdadero. También se invoca la creciente competencia que han empezado a soportar aquellos cultivos entre su uso ancestral, como alimento, y el nuevo uso asignado por el capital a los mismos cultivos con pretensiones ambientalistas, como combustible. Eso último, al menos, parece acercarse más a lo real.

Las principales causas, empero, de los mencionados encarecimientos provienen del mundo financiero. El desarrollo (vertiginoso y en proporción geométrica) del comercio-a-futuro no es sino, y no puede ser sino, un disparador de precios. Porque la propia idea de transacción a futuro es especulativa. Y no puede dejar de serlo.

Pero junto con la economía-casino como principal fuente del hambreamiento de seres humanos hay una coyuntura muy ilustrativa que no hace sino reforzar ese aspecto financiero y consiguientemente el hambre que desata.

Desde hace algo más de un año, la crisis financiera y especulativa de la economía estadounidense es inocultable. El desfonde inmobiliario, como en algún momento el del NASDAQ [el mercado electrónico de acciones en Estados Unidos], está disparando las inversiones hacia otros campos. Los fondos vinculados a la actividad inmobiliaria son, por su extensión, inmensos, probablemente mucho mayores que los de cualquier rama industrial.

La "corrida" de las hipotecas ha "llevado" a sus titulares a encontrar lugares más seguros o promisorios de inversión, y ¿qué mejor en la coyuntura que los alimentos, que precisamente sufren semejante demanda por causa de los necrocombustibles o cualquier otra?

Lo que decimos, en realidad, lo que repetimos, lo han expresado claramente los titulares de tales fondos.

Los especuladores del mundo bursátil habían estado viendo mermas en las ganancias fáciles a que estaban acostumbrados con los negocios inmobiliarios. Y al mismo tiempo, los mercados alimentarios han sostenido o tendido a alzar sus cotizaciones desde hace por lo menos siete u ocho años. Eso ha llevado a que los especuladores pasaran de golpe (todo arran-

ca masivamente el año pasado, o fines de 2006), de ámbitos como la construcción, la venta de inmuebles y el adueñarse de bienes hipotecados a invertir en "alimentos".

El informe, elocuentemente titulado "Desigualdad global: especuladores financieros cosechan ganancias sobre la base del hambre global" *[Global Inequality: Financial speculators reap profits from global hunger],* escrito por Stefan Steinberg (http://www.wsws.org/articles/2008/apr2008/hedg-a24.shtml), no hace sino citar a una vocera de la ONU, Josette Sheeran, directora en el Programa Mundial de Alimentos que calificó la situación actual como un "tsunami silencioso" que puso en situación de hambre a por lo menos otros cien millones de habitantes del (amén de los ya existentes). Sheeran remata diciendo que éste es el nuevo rostro del hambre: "millones de seres humanos que no pasaban hambre hace seis meses ahora están es semejante situación".

El brusco ascenso de precios ha llevado, por ejemplo, a que cuidadores de cerdos ingleses sacrifiquen sus dotaciones puesto que proveerlos de comida, de grano, los excede.

Si esto pasa con cerdos en países enriquecidos, imaginen lo que puede pasar con humanos en países empobrecidos. Haití, bajo la vigilancia de militares del Cono Sur americano, nos ha mostrado su trágico rostro. Algo que parece no haber sido advertido por los gobernantes brasileños, chilenos, argentinos y uruguayos.

Steinberg establece una ilustrativa correlación: en EUA los alimentos venían aumentando sus precios, aunque de forma muy moderada, desde 2000. Cuando empieza el desplome bursátil de los fondos de pensión y otros, como consecuencia del descalabro hipotecario, los precios de los alimentos pegan una estampida.

Vale la pena transcribir un párrafo que Steinberg extrae de un artículo del *New Statesman*, "The Trading Frenzy That Sent Prices Soaring", [El vértigo comercial que disparó los precios]:

> Así como el boom inmobiliario aumenta los precios de las viviendas, el aumento de precios de las *commodities* [no son sólo alimentos; puede tratarse también de petróleo u oro; *commodity* es todo producto vendible a granel] se alimenta a sí mismo. Cuanto más aumentan los precios y se hacen grandes ganancias, más gente invierte con la esperanza de grandes márgenes. Observen los sitios electrónicos dedicados a las finanzas: todo el mundo se aglomera por comprar *commodities*. El problema es que si usted pertenece a los casi 3 mil millones de seres humanos que viven en el planeta con menos de dos dólares diarios, puede terminar pagando esas ganancias con la vida.

Algunos festejan: un analista de materias primas en el mercado "global", Abah Ofon, nos recuerda que "la materia prima es la gran inversión de la década". Pero en círculos más íntimos los cabecillas del FMI han reconocido que estamos en presencia de la más seria crisis financiera desde 1929 (ver http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8846).

Con un dólar en permanente baja a causa de las grandes burbujas financieras, de las enormes estafas tipo Enron, del mecanismo según el cual el déficit monstruoso de EUA (que no se le soportaría a ningún otro Estado en el mundo salvo al de Israel) es sostenido con la maquinita de imprimir dólares verdes, el precio de los alimentos básicos se fue disparando. El proceso se acentúa, cuando surge "la movida ecológica" de auspiciar los *bio*-, los necrocombustibles, como sustitutos del petróleo.

Reparemos en que EUA ha volcado un tercio de su enorme producción de maíz a bioetanol. EUA no va a poder mantener sin cambio la vieja política de proveer maíz a países dependizados a través del infame sistema "del barco a la boca". Esos países seducidos, persuadidos u obligados a abandonar los cultivos locales "para modernizarse", que recibían su comida desde "el mercado global" y/o los "benefactores" yanquis, se encuentran ahora con precios inaccesibles. El mundo financiero de EUA está demasiado ocupado cotizando "el alimento" de sus autos y además, procura zafar de la varadura financiera de las hipotecas fallidas, pasándose masivamente a los alimentos en bruto.

Jean Ziegler, encargado de la ONU en el área de alimentos ha advertido que estamos ante "una matanza inminente".

Mientras Ziegler al menos llama a las cosas por su nombre, un hombre de las finanzas, como Andreas Grünewald encargado de fondos buitre del Münchner Investment Club, entrevistado por *Der Spiegel* —que preguntó si la nueva burbuja financiera, ahora alimentaria, no llevará el hambre a poblaciones inermes de países empobrecidos—, declara: "No es algo que le interese a nuestros inversionistas. Son bastante indiferentes y se mueven únicamente por la ganancia".

Así queda en negro sobre blanco, una vez más que, como en Argentina, en todas partes, hay un buen sector de la humanidad que únicamente lleva el signo de pesos o el de dólares, en la retina.

Tomado de ecoportal, 10 de junio

Luis Sabini, Universidad de Buenos Aires, editor de la revista semestral *futuros en el planeta, la sociedad y cada uno.*

Quevedo, Ecuador

Oasis de organización en los desiertos del monocultivo

Wilson Vega Ortiz y Fernanda Vallejo

Llegar a Valencia no es muy difícil. Es un enclave, como tantos, ubicado en la carretera Quito-Guayaquil, el ducto más importante de circulación de mercancías desde los Andes hacia el puerto principal. La sonda de salida diaria de la riqueza que sangra este país: su gente, su naturaleza.

Llegar a las fincas campesinas, islotes envueltos en la ruta del capital, es un poco más complejo. Para llegar a ellas, es necesario pedir permiso a los señores del lugar. En estricto sentido. Parecería que no hay caminos para llegar allá, únicamente un entramado de vías de circulación de maquinaria y mercancía, en medio de enormes desiertos de banano, piña, teca, palma africana. Kilómetros y kilómetros de plantaciones.

Mientras uno transita por la carretera, cualquiera podría pensar que nuestro país es nuestro. Lo curioso es que adentrarse por las veras es trasladarse a otro tiempo-espacio, donde el país deja de pertenecernos. Un universo poblado de señores omnipresentes y siervos, fabricado a la medida de nuestros tiempos —maquinarias, sistemas de riego, fertilizantes, pesticidas— pero sostenido con nuevas vueltas de tuerca en formas medievales de sujeción de gentes: guardias de seguridad, capataces, barracas para jornaleros, incluso escuelas encerradas en los feudos. Nuestro país deja de serlo para devenir los países privados, señorío de oligarcas y transnacionales: *Bonita Banana*, de Álvaro Noboa (el hombre más rico del Ecuador), *Dole,* haciendas del grupo *Wong* (el segundo en la cadena de control del banano y otros productos de exportación).

A medida que nos adentramos en ese otro mundo, obvio pero invisible, mientras los paisajes nos dejan una vena de desolación en las pupilas, se abren paso pequeñas fronteras, floridas y diversas con su color y sus múltiples aromas, que inexplicablemente nada opaca, ni siquiera los pesticidas que rocían implacables las avionetas por aire y la maquinaria en tierra. Allí mismo, donde el reordenamiento del espacio uniforma, fragmenta y dispersa, se incrustan estas bolsas de resistencia, "sobrevivientes del *nuevo* orden mundial", las comunidades y asociaciones de campesinos Camarones y Ocho de Marzo, organizados en la UOCQ (Unión de Organizaciones Campesinas de Quevedo).



Aquí viven, "café, almuerzo y merienda", recibiendo un chorro de agroquímicos y pesticidas desde avionetas y fumigadoras mecánicas, bañándose y bebiendo agua contaminada de sus esteros, otrora fuentes cristalinas de vida. Campesinos, hijos de campesinos sin tierra que conquistaron su derecho a quedarse mediante lucha, resistencia y organización. Descendientes de oleadas migratorias sucesivas que, desde el siglo XIX no han dejado de llegar, cuando estas tierras eran *montaña* (bosque nativo) donde señoreaba el cacao silvestre, que unos pocos acapararon, recogieron y explotaron hasta acabarlo para luego tener que cultivarlo. Nietos de siervos conciertos de la Hacienda Serrana que, tras la revolución liberal vinieron en pos de trabajo asalariado, hijos de campesinos de regiones cercanas que tuvieron que abandonar sus tierras durante largas e interminables sequías.

Aquí están, tanto tiempo como los oligarcas, disputándoles el territorio, el espacio, el tiempo y el sentido de la historia. Siempre en desventaja, siempre presentes, siempre tejiendo comunidad. Aún cuando las decisiones que les atañen se tomen cada vez más lejos, cada vez más a sus espaldas, siempre-siempre sin su consentimiento, sin su autorización.



Entrada a una de las "repúblicas privadas" de los zares de la agroindustria en Quevedo, Ecuador.

Quiso la naturaleza que estas tierras se cubrieran de un metro de tierra fértil traída por los ríos desde los Andes. El río Guayas es una de las más importantes venas acuíferas del Pacífico. Su cuenca, la más fértil de la región, se alimenta de ríos navegables que acopian casi todas las escorrentías andinas: el Babahoyo y el Daule. Quiso la naturaleza, que estas tierras sean, una y otra vez, objeto de codicia insaciable.

Para la constitución del espacio costeño, el dominio colonial avanzó sobre espacios mayoritariamente "vacíos", donde la ocupación de vastas zonas supuso la eliminación de la frondosa vegetación natural para expandir las actividades agropecuarias estables.

El proceso más relevante de organización espacial y social se produjo alrededor de la producción de cacao para la exportación. A partir de estos procesos en la Costa, que venía siendo ocupada por propietarios y ganaderos con terrenos medianos y pequeños, comenzó a expandirse el latifundio como forma dominante de posesión de tierras. Originadas en las plantas de cacao existentes en forma silvestre, las haciendas se expandieron en gran medida a lo largo de las vías fluviales. Se inauguraron formas asalariadas de relación laboral que atrajeron oleadas migratorias, principalmente de la Sierra, aun a pesar de que se establecieron sistemas de sujeción de jornaleros mediante endeudamientos forzados y formas represivas de control de gentes que, incluso hoy, no han dejado de funcionar.

Engarzadas a los circuitos globales del capital, desde que nos hicimos República, estas tierras han sido reutilizadas de continuo para la producción primaria de exportación, proveyendo con una generosidad que pareciera sin límites, año tras año, siglo tras siglo, múltiples productos que aseguraron una permanente y sistemática acumulación.

En las entretelas, los jornaleros fueron haciendo su propia historia, tejiendo sus propios tramados de relaciones, dando sentido a este territorio. Ocuparon silenciosamente las hendijas y las periferias de los feudos, y se tornaron irrefutables. Allí mismo, en los mismos tiempos, se ocuparon de producir su alimento y el de los demás. Poco a poco se volvieron los principales proveedores internos de arroz, café, soya (97% de la producción nacional), maní y frutales. Sin embargo, no dejaban de ser marginales, precaristas.

Así se constituyeron los campesinos de la región. Así se organizaron y empezaron a demandar tierras para continuar produciendo. Entre 1960 y 1970, ocuparon parte de los latifundios y les fue entregado otro tanto a través de procesos de reforma agraria, o de un fraccionamiento venta de propiedades por parte de algunos terratenientes. Las movilizaciones campesinas en la Costa tomaron mayor fuerza a partir del Decreto 1001 promulgado por el entonces presidente Velasco Ibarra en 1970, donde abolía el precarismo en las tierras destinadas al cultivo de arroz.

Tras el cacao, vino el banano y con éste, la agricultura bajo contrato, la Revolución Verde y una serie de plantaciones agroindustriales que, con pequeñas variantes, mantuvieron un mismo sistema de explotación, acumulación y despojo. Luego, con la exportación petrolera, el Estado asumió una mayor presencia impulsando una inserción más directa del campesinado a la agricultura de mercado.

Esa presencia favoreció el crecimiento de un importante tejido organizativo en un ciclo que resultaría corto. En menos de diez años, la implantación de políticas de ajuste estructural desmanteló la infraestructura de acopio, la asistencia técnica, las pequeñas líneas de crédito que tanto esfuerzo costara a las organizaciones conquistar. Pero lo peor de todo fue la vuelta al principio: estrangulados por las deudas, quebrados por los precios asignados a sus productos, agotados sus suelos y cercados por las grandes propiedades que los envenenan todavía a diario, muchos campesinos terminaron vendiendo sus fincas para volver a ser asalariados o se vieron forzados a producir para el patrón como jornaleros en sus propias tierras.

La mayoría de los campesinos posee entre 5 y 20 hectáreas de tierra. Parte de su extensión es trabajada intensamente para la agricultura de ciclo corto y otra parte para cultivos de subsistencia o una combinación de plantaciones forestales —frutales con vegetación "natural". Los animales son importantes

al igual que las especies maderables, ya que generan ingresos en épocas de baja producción o malos precios. Los cultivos de ciclo corto generalmente están asociados a la agricultura convencional. Un creciente porcentaje de campesinos no tiene tierra, son quienes dependen principalmente de la venta de su fuerza de trabajo o arriendan lotes para la producción intensiva de maíz, arroz, pimiento, tomate, maní con un sistema convencional que los ata cada vez más a un círculo vicioso de endeudamiento en canales de usura y compromisos de venta a los proveedores de insumos.

La consolidación del modelo agro-exportador y agroindustrial en la zona ha acentuado los problemas estructurales. Los sistemas de producción para la agro-exportación y la agroindustria requieren de grandes y permanentes volúmenes de producción. En consecuencia necesitan de extensas superficies de tierra y/o de la intensificación de los procesos productivos. Sin embargo, las grandes propiedades han optado por incrementar su productividad expandiendo la frontera agrícola. Uno de los mecanismos para obtener tierra ha sido apropiarse de terrenos "baldíos", es decir remanentes de bosques y vegetación silvestre. El otro, apropiarse de la tierra de los campesinos de diversas maneras, todas ellas abusivas —desde la coerción hasta la compra forzada, en una estrategia de acorralamiento que incluye la amenaza, el sicariato, el uso de gobiernos locales para incorporar normas o reglas que impidan a los campesinos defender sus derechos. No teniendo opciones de existencia, la mejor alternativa es vender la tierra a los caciques locales.

Obviamente, la concentración es insaciable. No basta con controlar la tierra, o el crédito o los insumos, es imprescindible quedarse con el agua. Tratada como si fuese cosa aparte de la tierra es objeto de codicia, acaparamiento, especulación y robo, desde hace tiempo y de múltiples formas, particularmente en esta zona.

Las agroempresas siempre consiguen adjudicaciones preferenciales, puesto que sus dueños son los mismos que ocupan cargos, que aseguran privilegios. Estos grandes propietarios realizan *tapes* (pequeños embalses) en esteros y ríos que atraviesan sus tierras, abren y construyen pozos, construyen albarradas o directamente instalan las captaciones en los ríos más caudalosos. En la mayoría de los casos, sin consentimiento de la población local y sin la concesión del derecho de uso otorgado por la Agencia de Aguas. Se roban el agua con impunidad.

Sin embargo, quieren más. Mediante cíclicas cruzadas de modernidad, cada cierto tiempo impulsan la construcción de grandes embalses a los que llaman "proyectos multipropósito". En el norte de la provincia de Los Ríos existe uno en funcionamiento —el llamado Jaime Roldós Aguilera— y otro, más sofisticado y terrible en construcción: el Baba.

El proyecto multipropósito Baba emprendió la ocupación efectiva del territorio apenas hace dos años, aunque estuvo proyectado hace mucho tiempo. Sin las autorizaciones mínimas, sin un estudio básico de impacto ambiental, sin avisar a nadie, sin consultar con nadie, menos aún a los que dan vida y sentido a estos territorios, cerca de 75 mil familias campesinas recolectoras —y con ellas, sus fincas, cerca de cien escuelas y varias reservas ecológicas—, fueron sorprendidas con la presencia de maquinaria y campamentos de una empresa cuyo nombre, desconocido hasta entonces en el lugar, tiene un famoso historial de abusos en otras tierras: la *Odebrecht*. Un proyecto que ocupa y "despeja", mil hectáreas



Centro de empaque de piñas, Quevedo, Ecuador.







De arriba hacia abajo: vista de las masivas plantaciones de piña; máquina fumigadora para rociar plaguicidas químicos; panorámica del temido proyecto multipropósito Baba, Quevedo, Ecuador.

de tierras cultivadas y se apodera de 86% del caudal del río Baba (que puede llegar a contener 395m³/s), para producir 45MW de energía eléctrica, ¡apenas el 1% de la energía nacional!

Tal arrogancia tuvo por respuesta una aguerrida movilización popular que detuvo las obras y paralizó el proyecto, al menos hasta que cuenten con autorizaciones ambientales de la correspondiente cartera de estado. Hasta que alguien explique qué razón tan grande puede haber para liquidar tantas familias, para convertir un río en una gran cloaca, qué sentido tiene embalsar tanta agua para regar tan pocas propiedades en otras regiones, qué justifica tanta devastación ecológica y humana. Porque la gente que vive en un lugar puede no conocer lo que otros deciden a sus espaldas, pero sí está dispuesta a encarar a los intrusos que vienen y se adueñan de sus tierras aún a costa de la cárcel o de sus propias vidas. Porque siempre se paga con vidas y prisión el derecho de vivir en paz.

Así ha sido. Poco después de parado el proyecto, éste recibió autorización del Ministerio del Ambiente y dos dirigentes campesinos fueron encontrados muertos en la vera del camino a sus casas, nadie se explica porqué. Finalmente, algunas familias, habiendo recibido cantidades nunca soñadas por sus tierras (siempre irrisorias para la empresa) o convencidos de conseguir un empleo que promete ser más suave que la faena agraria y garantiza liquidez mensual, terminan claudicando y cediendo espacios a un poder tan poderoso. Realmente, es duro mantener la entereza en un entorno de asedio tan brutal y de dislocación tan persistente.

Pero esta historia, que se parece tanto a cualquiera de nuestros países, que resulta increíble a estas alturas del siglo, no es solamente la historia del poder y sus viejas y remozadas e incesantes formas de saquear y expulsar. Es sobre todo la historia de las batallas y las resistencias de los campesinos, tan persistentes como ese poder que les persigue. Batallas y combates, luchas, movilizaciones; también resistencias y perseverancias en las formas de tejer y retejer comunidades, de producir alimentos, alimentar la esperanza, de reciprocarle creces a la tierra lo recibido, pensar/se cada día, y no permitir que el poder los convenza de no ser lo que son.

Así llevan décadas federados en su organización local (la UOCQ), anudando lazos con organizaciones mayores, convocando a otros, colocando sus alternativas cuerdas y generosas de cómo vivir en un mundo que alcance para todos. Es así como en medio de los caciques, el miedo, y la violencia, estos rincones de vida como bastiones en medio de los enormes desiertos de monocultivo siguen siendo centros que resisten la Revolución Verde e interactúan buscando más diversidad, más autonomía productiva, más comunidad. Una organización que investiga y recupera variedades propias y sentidos y alimentos y fertilidad. Una organización que se reúne para pensar entre todos y así construye día a día su fuerza y sus opciones. Asociaciones, comunidades que tienden puentes y convocan solidaridades, para denunciar atropellos, para demandar según los cánones de la ley del poder, o para levantarse cada vez que sea necesario.

Hace más de diez años la UOCQ se trazó el reto de recuperar su propia agricultura y con apoyo de algunas ONG (Terranueva, Terranuova, CRIC, FIAN, Heifer-Ecuador, sobre todo) y la Universidad Técnica de Quevedo construye alternativas, experimenta y multiplica experiencias entre sus familias. Así, se introdujo el uso de la mucuna asociado al maíz para conservar la fertilidad del suelo, superar el crecimiento de "malas hierbas" y aprovechar el grano como alimento para los animales. También prueba cruzamientos del cacao nativo buscando mantener las características únicas de aroma y sabor incorporando la precocidad y resistencia de las variedades comerciales. Prueba además sistemas de riego parcelario para cuidar el agua tanto como la tierra.

Con Heifer-Ecuador, las asociaciones de mujeres fortalecen su participación en la organización a partir de la crianza de animales menores (gallinas ponedoras, pollos broiler y cerdos). Poco tiempo tomó y algo de reflexión, para que las mujeres consiguieran aprendizajes significativos y como el manejo de variedades foráneas requiere de mayores cuidados, insumos y conocimientos externos (compra de balanceado comercial, pie de cría mejorado industrialmente, aplicación de vacunas), que pueden hacerlas más dependientes del mercado, se investigó, probó y se recuperaron saberes. Juntas han aprendido a elaborar su propio balanceado casero con productos propios, reaprendieron a criar sus gallinas nativas y sus cerdos rústicos. En esto arrimó el hombro la Universidad de Quevedo.

Animar los procesos de capacitación e intercambios de experiencias permitió que las compañeras se relacionaran entre ellas y conocieran procesos de otras organizaciones. Esto favoreció la cohesión entre ellas y fue un punto de partida para posicionar sus demandas en la UOCQ, volverse visibles en los cargos de dirección.

Y mientras producen, investigan y reflexionan, fortalecen pequeños fondos revolventes y sistemas de compartir los recursos, conquistando pequeñas autonomías, como mujeres, como organización. Construyen sus propias formas de complementarse y administrar con responsabilidad. El trabajo conjunto propicia sus esfuerzos de mayor encuentro, de hacer más y más organización, de recuperar su historia, sus tecnologías, sus saberes y ponerlos al servicio de su proyecto político y de vida.

Son familias que bordan sus vidas y sus condiciones materiales a contrapelo. Como donde Marcia Caicedo, vicepresidenta de la UOCQ y asambleísta alterna, que nos muestra con orgullo la "nube" de gallinas y pollitos criollos, sus cerdos felices, los peces de su estanque mínimo, en su predio de menos de una hectárea rodeado de agroempresas y nos obsequia el solaz de jugosos zapotes a la sombra de un árbol, o como don Alfonso Intriago y su vergel de dignidad, que nos ofrece su cacao de aroma —el nativo—, sus naranjas criollas y la chicha de chontaduro fabricada por su hija, en su preciosa vivienda de arquitectura tradicional, con adecuaciones "modernas", o su nieta de 12 años que nos pregunta todo el tiempo "tienen esto en la tierra de donde vienen… ¿cómo no tienen? llévense para que prueben, para que tengan…".

Hay muchos frentes todavía que encarar, la entrada de transgénicos, el avance de la represa, la agricultura de contrato. Pero hay mucha alma en estas tierras que no se doblega.

Wilson Vega y Fernanda Vallejo son parte del equipo de la Fundación Heifer-Ecuador: una organización no gubernamental ecuatoriana de desarrollo rural, que parte de principios y valores afines a Heifer Internacional y está vinculada con ella. Apoya y promueve procesos organizativos democráticos de sectores campesinos, indígenas y populares, potencia sus capacidades locales para una gestión sustentable de los recursos naturales y de los sistemas productivos agropecuarios con un enfoque agroecológico.



“No a la mina, — no revienten — las montañas”

Reunimos varios fragmentos de testimonios, análisis, documentos y crónicas de lo que significa la minería en varios países, y del rechazo y la resistencia que se levanta para impedir la explotación y la devastación que acompaña extraer minerales en gran escala.

Un grupo de activistas opositores a la Minera San Xavier (MSX) participó el 17 de junio en la asamblea general de accionistas de Metallica Resources —propietaria de la mina— en Toronto, Canadá para denunciar ante sus inversionistas que su empresa ubicada en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí en México, es ilegal y peligrosa para el ambiente. Su presencia causó estupefacción en el potosino Jorge Mendizábal Acebo, empleado y vocero de los canadienses que nunca se imaginó reencontrar a sus rivales en esas latitudes. El hidrólogo Mario Martínez les preguntó a los accionistas si estaban enterados que su empresa tenía problemas legales para su operación, y les distribuyó un copia del reciente fallo del Juzgado XI de Distrito que coloca a la minera en su fase terminal. Desde octubre de 2005 la corte ordenaba la nulidad del permiso de funcionamiento que el Instituto Nacional de Ecología le otorgó a la transnacional en 1999. En ese fallo MSX perdía su autorización para operar, pero tramposamente y en desacato a la resolución judicial se le concedió un nuevo permiso con menos condicionantes que el anterior, que les dio justificación para operar.

Desde que los canadienses empezaron a operar en esa localidad sabían del riesgo que representaba invertir en un área protegida, con un inmensurable valor histórico y cultural, defendida desde diferentes trincheras por un puñado de ambientalistas desdeñados y maltratados por los administradores de la empresa y los funcionarios gubernamentales. La prepotencia y el hecho de sentirse protegidos por los gobiernos panistas, les hizo creer a estos administradores que la minera trabajaría sobre lo que fuera, incluso gastando “millones de dólares” en su defensa jurídica, dinero del cual hay una enorme cantidad en sobornos para “ablandar” a corruptas autoridades y comprar espacios publicitarios. Los días de MSX están contados. *Notario Eduardo Martínez Benavente, junio de 2008*

Hace unas semanas resucitó el permiso de la Mina Crucitas en Cutris de San Carlos, Costa Rica (anulado hace tres años por la Suprema Corte de Justicia) para instalarse a sólo 3 kilómetros del Río San Juan (limítrofe con Nicaragua), una zona ambiental y políticamente frágil. Será un desastre en esta zona y ocasionará conflictos de grandes proporciones (destruirá la capa vegetal, contaminará mantos acuíferos, desertificará los suelos, matará la biodiversidad por venenos o sedimentos, alterará la tierra y el paisaje, gastará y contaminará el agua, dañará la salud de las personas—problemas visuales, respiratorios, mortales a largo plazo— y afectará la sociedad —dividiendo a los pueblos y debilitando la pesca y el turismo.

Así ocurrió con Miramar (única mina de oro a cielo abierto en el país, desastrosa en todos sentidos y cuya empresa se declaró sin fondos para no reparar los daños que ha causado, por lo que el gobierno nicaragüense está por impulsar una demanda contra Costa Rica.

Proyecto tras proyecto, las compañías demuestran que su imagen corporativa de progreso no se concreta. Y el gobierno, defensor del desarrollo minero, no es competente en la supervisión: en el mismo permiso de Crucitas se consignó que sería la empresa la que va a capacitar al personal que les va a fiscalizar, ¿la empresa juez y parte? Y mientras nuestros campesinos sufren sequías, el gobierno, con dicha mina permite explotar más de 30 mil litros de agua por hora.

Los años nos concedieron la razón cuando a fines de los ochenta —¿será coincidencia que teníamos el mismo presidente?—, la población de San Carlos supimos defender nuestros recursos de Eurospec, que pretendía explotar el territorio que hoy conocemos como Parque del Agua Juan Castro Blanco. Y seguiremos. *Heidy Murillo Quesada, presidenta de la Federación de Organizaciones Conservacionistas (Fecon)*

Las perforaciones exploratorias de un grupo de geólogos argentinos, contratados por una empresa canadiense, revelaron que la Puna en la provincia de Salta sería un importante reservorio de agua. Aho-

ra, pretenden exportar el agua a la minera La Escondida, en Chile, la mayor extractora de cobre del mundo.

La polémica no tardó en encender la zona. La gente de Tolar Grande, pueblo ubicado en el Altiplano salteño, a más de 3 500 metros de altura, siente que le están extrayendo un recurso vital. El diario *El Tribuno,* de Salta, reveló que ya se estaría extrayendo agua para enviar a La Escondida, y habló de un negocio de 5 700 millones de dólares.

"Se trata del primer estudio hidrogeológico para medir el potencial de la Puna", señaló el ingeniero Rubén Gianni, quien trabaja para Mines Argentina.

"El pueblo de la Puna no va a permitir el saqueo", indicó Leopoldo Salva, diputado por el departamento Los Andes, que abarca toda la Puna salteña. Las mineras necesitan mucha agua para funcionar y La Escondida se está quedando sin ella. "Los chilenos ya le han prohibido que saquen agua de su territorio", señaló Salva.

Según Gianni, "no se pretende secar la Puna. Estamos estudiando cuánta agua hay en esta zona y si luego de abastecer a la región queda un saldo para comercializar". Según el geólogo, no hay cuestionamientos éticos ni legales para vender agua, que puede ser tratada como cualquier otro mineral. "No es una herejía vender agua", aseguró.

Salva alertó: "quieren vender agua dulce a Chile. En ningún momento han venido a hablar con el pueblo ni con la comunidad. Recién ahora".

Según el estudio, uno de los pozos de exploración cerca del cerro Socompa, en el límite argentino-chileno, bombeó 500 mil litros por hora, como las mejores cuencas argentinas. El objetivo de la empresa canadiense sería vender mil litros de agua por segundo. "El agua excedente que se encuentre ya pertenece a la empresa Mines Argentina", aseguró Gianni. *Fundación Proteger-miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)*

Datos líquidos. Las minas de carbón a cielo abierto que operaban en Escocia usaron en 1980 el equivalente de 13.2 toneladas de agua por tonelada de carbón producido. Podemos entender por qué la minera Intercor en Colombia le niega a las poblaciones rurales y wayuú de la Guajira acceso a la represa construida por la corporación después de cambiar el curso de los ríos.

Las operaciones de la Southern Peru Corporation (SPC) en las minas Cuajone y Toquepala requieren de 1 700 litros de agua por segundo, más 500 litros por segundo de aguas subterráneas. El efecto es que la laguna Suche, que abastece las actividades de la SPC disminuye el nivel de sus aguas en 986 litros por

Están dinamitando las montañas del sur
para sacar tierra con oro
y para el tratamiento del metal a la luz
van a usar cianuro.
El agua de las napas y el deshielo traerá
escombros de metales pesados
y sus drenajes ácidos intoxicarán
ríos, arroyos y lagos
No, no dejemos que sea cierto
No, no revienten las montañas
No a la mina a cielo abierto
No al veneno en sus entrañas
Venden los campos con gauchos adentro
exploran hectáreas, explotan los cerros
A nuestro paraíso de la cordillera
quieren convertirlo en área minera
Van a pudrir todo
Va a llevarse el oro
No, no dejemos que sea cierto
No, no revienten las montañas
No pasarán, no pasarán
No a la mina a cielo abierto
No al cianuro en sus entrañas
No pasarán, no pasarán
No pasarán, no pasarán
No pasarán, no pasarán
No pasarán, no pasarán

Miguel Cantilo, Rock contra la mina





Vergel en una finca campesina, Quevedo, Ecuador.

segundo, mientras que la demanda de aguas subterráneas reduce 250 litros por segundo el nivel de las aguas de los ríos de la zona.

El periódico colombiano *El Tiempo* reportó (el 31de octubre de 1994) que en la región del Chocó las corporaciones mineras vertían 4 400 toneladas de deshechos tóxicos en los ríos. ¿A cuánto ascenderá esta cantidad en catorce años tomando en cuenta que la producción se ha disparado en todos los países de la región en respuesta a la demanda y los altos precios?

La mina Marlin (de Montana Exploradora) en Guatemala secó 6 pozos que utilizaban las comunidades. La mina usa 250 mil litros de agua por hora, mientras una familia campesina de San Miguel de Ixtahuacán usa 30 litros al día. Es decir, la mina utiliza en una hora el agua que una familia campesina utilizaría durante más de 22 años.

La mina de oro Summitville en el sur de Colorado, Estados Unidos, operada por una corporación canadiense, se anunció como modelo de lo que la minería moderna podía hacer, pero apenas comenzó a operar en 1986, arrojó cianuro, ácidos y metales pesados en el río Alamosa, envenenando un tramo de 27 kilómetros. La compañía se declaró en bancarrota en 1992, la Agencia de Protección Ambiental se hizo cargo y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha logrado conseguir que los canadienses congelen los activos de la compañía para rembolsar los 100 millones de dólares que se han gastado tratando de reparar el daño. *Defensora Pachamama, Ecuador, 3 de junio de 2008*

Jethro Tulin, representante de la comunidad Ipili en Papouasie en Nueva Guinea expuso que la empresa Barrick Gold llegó hace 17 años a su pueblo prometiendo trabajo, escuelas y desarrollo. Ahora Barrick Gold explota la zona provocando contaminación y muerte a la comunidad que se encuentra a pocos metros de la mina. Antes de la llegada de Barrick Gold, su pueblo vivía de la agricultura y la minería tradicional, ahora sus cosechas están contaminadas y los niños juegan y beben el agua contaminada con cianuro, provocando enfermedad y muerte. Al paso de los años la comunidad se organizó y resiste los embates de Barrick, que la empresa ha respondido con asesinatos, pues cuenta con un cuerpo de seguridad (paramilitares) que, sin importar a qué costo, han asesinado a más de 32 personas entre hombres, mujeres y niños, sin que los gobiernos tomen algún tipo de represalia, “nuestros gobiernos son débiles y corruptos”, comenta Tulin. *Kolektivo Azul, Montreal, Canadá*

Bajo la Alumbrera es una de las diez grandes empresas de cobre del mundo y una de las quince mayores de oro. Es el principal yacimiento en explotación del país y una obra que remueve diario 340 toneladas de roca y utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Son trece años de explotación minera, 680 millones de dólares de facturación anual, cuatro derrames tóxicos comprobados, unas diez denuncias penales por contaminación e innumerables acusaciones por incumplir el bienestar regional prometido. Este yacimiento es el caso testigo de la minería metalífera a gran escala, industria extractiva millonaria que avanza en Argentina a lo largo de la cordillera.

Pero el emblema de la minería nacional tuvo un pequeño freno: la Cámara Federal de Tucumán procesó al vicepresidente de la empresa, Julián Patricio Rooney, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud.

Con el fallo, sorpresa en Andalgalá y Santa María (los pueblos más cercanos al yacimiento), Rooney se transformó en el primer alto directivo de una gran empresa en ser procesado por contaminación. También se le aplicará un embargo, aún no determinado.

“Es la primera vez que una empresa de esta magnitud tiene un revés de este tipo. Sabemos que es sólo un paso, con una gran burocracia judicial que no sabemos cómo terminará. Lo que sí sabemos es que cada día somos más en esta lucha”, remarcó Javier Rodríguez Pardo, histórico militante ambiental y miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). *Darío Aranda,* página 12, *31 de mayo de 2008*

La Minera Majaz SA tiene un largo historial de irregularidades y violaciones a los derechos de las comunidades en Perú. En el Tribunal Permanente de los Pueblos el caso de la empresa sirvió para cuestionar sus actividades de exploración y la proyectada explotación minera a cielo abierto que pretende realizar en el proyecto Río Blanco.

Éste afecta a la comunidad campesina en la región norteña de Piura. Contamina el agua, afecta la actividad agropecuaria y la salud de miles de pobladores, y desertifica por los enormes montos de agua utilizados. Hay un alto riesgo de destrucción e impacto irreversible a la biodiversidad de la región Páramo y el bosque de neblina. Este impacto de la minería se extiende a la vecina región de Cajamarca, y afectaría la cuenca del Río Amazonas.

Majaz opera ilegalmente en el territorio de las comunidades afectadas, ya que obtuvo su licencia con documentación incompleta y sin respetar el derecho a la consulta que por ley se garantiza a las comunidades. Ha reprimido con violencia las protestas populares provocando heridas a decenas de personas, y ocasionó la muerte de dos comuneros hasta la fecha.

Majaz también promovió la acusación falsa de terrorismo contra decenas de pobladores —con el apoyo del gobierno—, por oponerse a las actividades abusivas y contaminantes de la empresa.

El presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca y dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), Magdiel Carrión, dijo: "A pesar de la difamación que se nos hace, los pueblos que vivimos en la zona somos conscientes y seguimos en resistencia, y no permitiremos que el gobierno atropelle nuestros derechos comunales, nuestros derechos como personas y como peruanos".

Carrión indicó la falta de diálogo: "no hay respeto, porque si quieres hablar ya eres terrorista, ya eres narcotraficante, o estás en contra del desarrollo, eres el *perro del hortelano* como se nos llama, y nos da lástima que un gobierno peruano, que está para gobernar y proteger al Perú, tenga que acusar o difamar de esa manera a los pueblos que resisten una imposición de las empresas trasnacionales".

Pese a las múltiples intimidaciones de varios años, Carrión sentenció: "La lucha ya lleva cuatro años pero nosotros seguimos resistiendo. Y en nuestras comunidades, creo que es difícil que pasen. Pasarán los militares si les es posible, pero no pasarán las empresas mineras por voluntad del pueblo". *RadioMundoReal, mayo de 2008 http://www.radiomundoreal.fm/rmr/rmr/?q=es/node/25354*

La minera Barrick Gold pregona tener la licencia social de Naciones Unidas porque ha certificado positivamente el uso del cianuro y cuenta con licencia de la UNESCO (que hasta hoy mantiene absoluto silencio) para destruir el ecosistema Pascua Lama en el corazón de la Reserva de Biosfera de San Guillermo en la provincia argentina de San Juan.



¿Quién le otorgó a Barrick el crédito del buen uso del cianuro? El Instituto Internacional del Manejo del Cianuro, esto es, una entidad creada por las propias transnacionales mineras a pedido de un comité que reúne a las partes involucradas en el marco del Programa Ambiental de Naciones Unidas, debido a los estragos que ocasiona el uso del cianuro en la minería, y así lavar la imagen de una actividad que registra impactos de contaminación desde el primer día. Su prioridad es ganarse la licencia social negada por las comunidades damnificadas o en vías de serlo, donde se explotan yacimientos a cielo abierto con cianuro. La entidad emite el Código Internacional de Manejo del Cianuro para la fabricación, trasporte y uso en la producción de oro. (Nada dice del ácido sulfúrico y del resto de la minería del cobre, uranio, etcétera. Sólo la del oro. Tampoco certifica que se destruya el cianuro después de la lixiviación del oro,

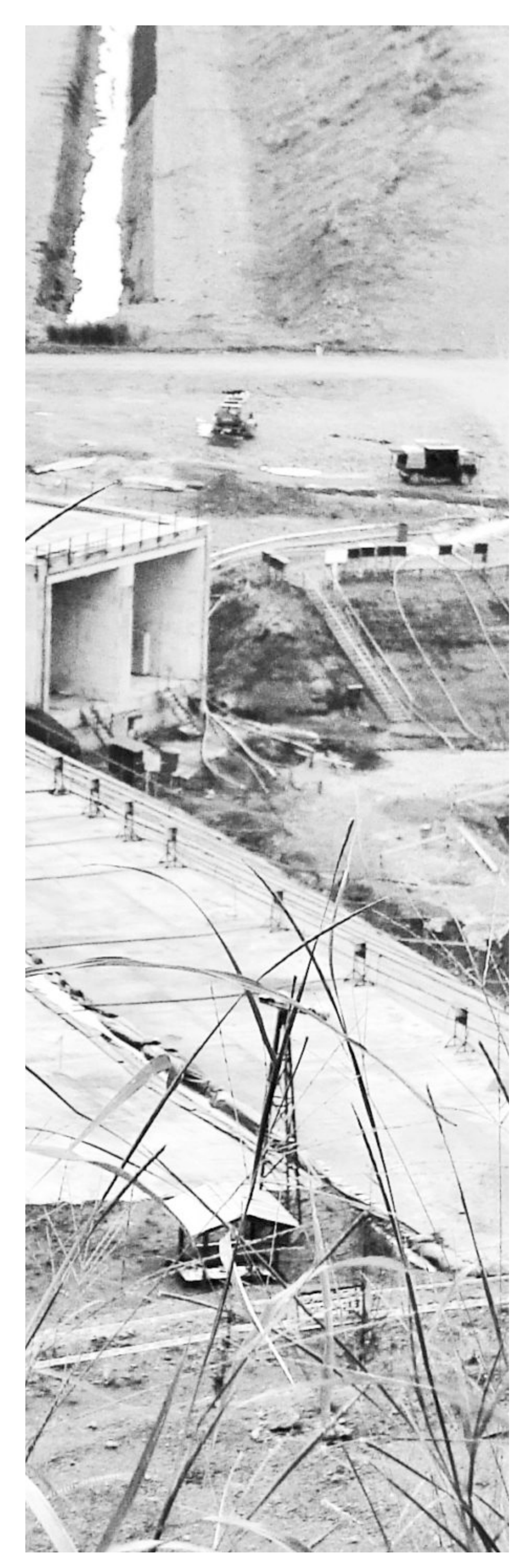
con lo que no se garantiza el control de los drenajes ácidos posteriores.) Todos los miembros que componen el directorio y que firman las certificaciones están involucrados en el comercio de la minería.

¿Quién gestionó la creación del Código Internacional de Manejo del Cianuro y a pedido de quien se constituyó el directorio? Barrick Gold es la respuesta. La transnacional gigante de la minería a cielo abierto ya certificó con este sistema sus tres minas en Sudamérica y antes las de Perú y Australia. *Javier Rodríguez Pardo, 16 de mayo de 2008, (machsepa21@yahoo.com.ar)*

Diversas corporaciones policiacas del estado de Colima mantienen un asedio desde el 12 de diciembre de 2007 sobre los poblados nahuas El Platanar, en el Ejido Plan de Méndez, y Las Pesadas, en el Ejido Ayotitlán, ambos del municipio de Cuautitlán, Jalisco, donde están asentadas las minas a cielo abierto Peña Colorada [que extrae 40% del hierro de todo México] y Minera del Norte (Minosa), subsidiarias de la corporación italo-argentina Ternium Hylsa. Es el conflicto de límites más antiguo del país, entre Jalisco y Colima (van 88 años). Ha pasado por los poderes ejecutivo y judicial y actualmente se ventila en el Senado de la República. El litigio comenzó con la matanza de Timbillos, en 1920, en que 13 indígenas de Ayotitlán y Telcruz fueron asesinados y sus cadáveres colgados durante días en unas higueras por la familia colimense Arias de El Mamey. El conflicto minero y territorial se ha extendido gracias al desinterés y la complicidad de las autoridades jaliscienses, y a la ambición de las colimenses. *Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).*

La Asociación Agrominera del Sur de Bolívar en Colombia (Asoagromisbol), se formó en 1993. Es una organización que impulsa sus exigencias por la defensa de la vida, de la pequeña minería, de garantías para la producción agropecuaria y la legalización de títulos, pero también mantiene la construcción del tejido social. Hoy es una Federación por lo que sus siglas son Fedeagromisbol.

Para finales de 1994 el Estado exigió que los mineros estuvieran asociados y así legalizarían hasta 96 hectáreas por cada asociación. Esto se informó a los mineros faltando tan sólo tres meses para el cierre de la convocatoria. Los mineros aceleraron los trámites y los presentaron a tiempo, pero el gobierno respondió que la mayoría de áreas no se podría legalizar porque se encontraban superpuestas por la familia Lleras Palacios que no era conocida en la región. Luisa Fernanda Landuros, accionista de Mineros San Lucas, pretendía comprarle a la familia



Lleras Palacios y venderle a la Multinacional Conquistador Mine.

Ante tal situación y por la complicidad del Estado, en 1996 las comunidades iniciaron una lucha jurídica y de denuncia nacional. Se intensificaron los asesinatos selectivos de líderes y la violación de derechos humanos por parte del ejército. Las comunidades se movilizaron, denunciaron lo sucedido y se juntaron con las marchas efectuadas en el sur del país.

En 1998 los paramilitares afirmaron que defenderán a como de lugar la inversión de Conquistador Mine y Corona Golfi. Asesinaron a Andrés Molina, líder del Sur-Sur, con lo que la gente se desplazó a Simiti y luego a la cabecera de San Pablo. Los mineros de la zona alta se solidarizaron movilizándose por Arenal, Miccoahumado y una delegación viajó a Bogotá, donde tomaron la embajada de Estados Unidos por 14 días, los desalojaron y se trasladaron a la Universidad Nacional, y desde allí realizaron acciones permanentes para visibilizar la movilización: había además 19 mil personas en Barrancabermeja, hasta que en octubre de 1998 se llegó unos acuerdos con el presidente Andrés Pastrana. Las comunidades firmaron directamente con el gobierno nacional sin intermediación de los poderes locales.

Al retornar las personas comenzó la arremetida más fuerte del paramilitarismo. La zona se encontraba militarizada por el ejército y al otro día aparecieron quemados los caseríos por los paramilitares, al igual que las alcaldías de Arenal y Tiquisio. Toda la región quedó bloqueada. A dos días de firmados los acuerdos en el camino de regreso a la zona alta de San Pablo, ocurrió una masacre y a finales de diciembre en el casco urbano otra. Frente a toda esta persecución, en 1999 las comunidades agromineras se declararon en resistencia. *Fedeagromisbol, "Experiencias locales de manejo y control local del territorio",* Semillas, *núm 32/33*

La huelga en Moquegua estalló cuando las autoridades de la región exigieron al gobierno central una mayor participación en los ingresos que deja la minera Southern Perú. Esta empresa explota dos minas de cobre, una en Moquegua y otra en la vecina Tacna, en la frontera con Chile, y opera una refinería en Moquegua. Con más de 2 300 millones de dólares de utilidades en 2007, Southern es la principal empresa minera del país y una de las más grandes explotadoras de cobre del mundo.

La Federación Minera, con más de cien mil afiliados, exige un aumento de sueldos y la incorporación a las planillas de los trabajadores mineros, que en un 80% trabajan en negro, mientras aumentan las presiones al gobierno para que suba los impuestos a las millonarias ganancias de las empresas mineras, que como único aporte al Estado peruano pagan el 30% de sus utilidades. En 2007 la minería exportó más de 15 mil millones de dólares, 60% del total de las exportaciones del país. *Carlos Noriega, "Una pueblada contra las minas", junio de 2008*

La posible explotación minera profundizaría todavía más la crisis alimentaria, provocada por la escasez y los altos precios del maíz, el frijol y el arroz pues en los departamentos donde se ubican los 29 proyectos de exploración de metales preciosos se concentra un 50% de la producción agrícola salvadoreña.

Así lo indica un estudio del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (Ceicom), realizado recientemente. "El gobierno ha concesionado 1 238.63 km² a empresas mineras, sobre todo canadienses y estadounidenses, en las zonas donde se produce una gran cantidad de cereales, lácteos, carnes, verduras y frutas, en unidades de producción campesina", señala la referida investigación.

El estudio *Impactos en la producción agropecuaria de las zonas de exploración minera, en el marco de la crisis alimentaria* demuestra que en los siete departamentos amenazados por la minería son Santa Ana, Chalatenango, San Salvador, Cabañas, Morazán, San Miguel y La Unión donde se produce 46.6% de los granos básicos del país. El informe también revela ahí se ubica 56.7% del hato nacional de ganado bovino y 28% del hato nacional porcino.

Esta producción está amenazada especialmente por el uso intensivo de agua en la separación de los metales y por la contaminación del aire, agua y suelo que genera el cianuro, los metales pesados y el drenaje ácido. La mayoría de proyectos están sobre las cuencas de los ríos Lempa, Sumpul, Grande de San Miguel, Torola y Goascarán.

La investigación advierte que la minería afectaría a 60% de la producción alimentaria (cereales, carne, leche, huevos, frutas, verduras y miel), pues algunos departamentos sin proyectos mineros serían alcanzados por la contaminación. "Es previsible que se profundice la destrucción de las unidades de producción agrícola familiares y se configure un escenario de mayor desarticulación de la agricultura en la zona norte del país. Esto incrementaría los riesgos en nuestra seguridad y soberanía alimentaria". *Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, El Salvador*

Un grupo de periodistas e investigadores independientes denuncian que el ejército estadounidense estuvo implicado en una pesadilla africana que ha

pasado muy desapercibida. Las guerras civiles y las invasiones que implicaron a la República Democrática del Congo (RDC) durante la última década, permitieron al vecino de la RDC, Ruanda, junto con su ejército, algunas milicias con apoyo ruandés y unas cuantas corporaciones multinacionales mineras, desplazarse a las regiones montañosas del este de la RDC y extraer oro, cobre, uranio, diamantes y coltan (para equipos electrónicos) mientras el caos irrumpía por todo el país. Según el periodista investigador Wayne Madsen, Fuerzas Especiales de Estados Unidos, algunos operativos de inteligencia y ciertas compañías militares privadas ayudaron al ejército ruandés y a sus milicias a invadir a la RDC. Para justificar la invasión se machacaba que Ruanda podía contrarrestar así a los hutus, que masacraron a cientos de miles de tutsis en Ruanda durante el genocidio de 1994 y que habían escapado al este de la RDC. Sin embargo, periodistas independientes como Madsen sugieren que el "problema hutu" fue solamente una artimaña. *John Lasker "Guerras en pos de los recursos de África",* Revista Pueblos, *11 de marzo de 2008*

En la Ley ecuatoriana anterior se decía que la concesión minera "es un derecho real". En la "nueva" le aumentaron la palabra "limitado", para que creamos que limitarán a los concesionarios. Pero cómo los limitan si esta concesión dice que puede ser transferida a otros, vendida, hipotecada. Seguir en los negociados de las bolsas de valores donde por pasar de una mano a otra se ganan millones de dólares. ¿Cómo que este gobierno no iba a permitir la especulación con las concesiones, que ya significaron millonarias ganancias para las empresas y otros que se han enriquecido con este jugoso negocio, antes incluso de sacar los minerales?

Según esta ley no hay lugar donde la actividad minera no se pueda realizar, incluso en "lagos, lagunas y embalses o en sitio destinados a la captación de agua para las poblaciones y en distancias de hasta 200 metros medidos horizontalmente desde los mismos". Según la ley sólo se necesita autorización del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, y con ese permiso pueden operar en las fuentes de agua aunque sean para consumo humano. *Coordinadora para la Defensa y Conservación del Noroccidente de Pichincha Codecono, 6 de junio*

El grito de No a la Mina de la movilización en Esquel y el plebiscito del 23 de marzo del 2003 definieron el rechazo abrumador al proyecto minero de oro y plata de la minera Meridian Gold, en Esquel, Argentina. Ésta, al ver que no podía hacer las perforaciones introdujo la figura de El Desquite, su subsidiaria, que en realidad son ellos mismos. Apareció una nueva empresa, que se llama Patagonia Gold, que es la que aparentemente tiene hoy Cordón Esquel y otros yacimientos (el paquete que tenía la empresa en la cordillera y precordillera en las inmediaciones de Chubut). Ellos nunca perdieron la esperanza de hacer la explotación ya que el plebiscito ganado por nosotros por el 82% no es vinculante, pero obligó a que los diputados sancionaran una ley prohibiendo la explotación minera a cielo abierto y el uso de cianuro de sodio. Eso fue inmediatamente posterior al plebiscito del 23 de marzo de 2003.

La minera de todas formas no se fue, sigue trabajando en varios lugares donde hizo previamente "manifestación minera", donde declaró zonas para la búsqueda de minerales polimetálicos. Una manera que hoy utilizan para revertir su situación negativa es metiendo querellas jurídicas infundadas a los habitantes ante la protesta. *Entrevista con Javier Rodríguez Pardo, de Marcelo Maggio: "La Cordillera de los Andes está administrada por transnacionales: es un Tercer país ubicado entre Argentina y Chile"*

En Sibanal, Guatemala, 34 comunidades expresaron su rechazo a la actividad minera el 18 de abril. En el proceso participaron autoridades municipales y departamentales, más representantes de organizaciones locales.

Otra consulta se realizó el 13 de mayo en las 53 comunidades del municipio de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, en las asambleas comunitarias. Participaron como observadoras autoridades de los municipios vecinos, diputados, representantes de organizaciones y del cuerpo diplomático.

La gestión inició cuando la comuna de San Juan Ixcoy, Huehuetenango fue notificada de un derecho minero otorgado a Guatemala Copper SA, para explorar 10 minerales metálicos en un área de casi 78 km^2, en ése y otros cinco municipios del departamento.

Para el proceso de consulta, las autoridades municipales convocaron a un cabildo abierto y se acordó establecer sesión permanente del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude). Se crearon 11 comisiones para atender comunicación, sensibilización, logística, alimentación transporte, redacción, documentación y sistematización. "La inversión fue compartida 60% la municipalidad y 40% las comunidades. Hubo dos comunidades en que la población decidió financiar sus asambleas", aseguró Andrés Escobar, de la Oficina Municipal de Planificación. El rechazo de la población fue masivo. En los municipios de Comitancillo y Tacaná, San Marcos, se programaron dos consultas los días 16 y 23 de mayo.

Otro rechazo ocurrió en Baja Verapaz, tras conocer que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) concedió un derecho minero a Procesadora de Minerales SA, para trabajar en la montaña de Chi Santiago, que colinda con Rabinal y Cubulco, Baja Verapaz, y Chicamán, Quiché. La licencia es para extraer barita. La minera cuenta con capital guatemalteco y tiene nexos con la empresa Pisos El Águila.

En la reunión del Consejo de Desarrollo Departamental (Codede), del 5 de mayo, y a solicitud de la sociedad civil, se decidió emitir un pronunciamiento contra las licencias otorgadas para actividades mineras en el departamento. Este pronunciamiento se presentará ante el MEM y las Comisiones respectivas en el Congreso de la República. "Aún no se han realizado consultas en ninguno de los municipios de Baja Verapaz, pero ante la situación las autoridades locales podrían sentirse presionadas a convocarlas", afirmó Araceli González, secretaria del Codede.

Colom ha declarado que el gobierno respetará los procesos consultivos. Sin embargo, en el Ejecutivo no se ha designado a un equipo o entidad para que se encargue de analizar y dar seguimiento al tema. *Infopress: Guatemala, oposición a minería sigue en aumento, 16 de mayo de 2008*

Con la "eficiente" entrega oficial de concesiones de exploración, hoy simplemente "mineras", y la complicidad o anuencia de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las empresas y sus cómplices invaden territorios engañando a la población y corrompiendo a autoridades locales y estatales. Las falsas promesas de bienestar, carreteras, o miserables rentas por la tierra, son los anzuelos comunes —los nuevos espejos o cuentas de vidrio a cambio de los metales preciosos o industriales. Desde 2000, casi 10% del territorio nacional ha sido entregado a las transnacionales mediante concesiones de explotación minera. La amenaza sobre cientos de miles de kilómetros cuadrados de tierra, propiedad en su mayoría de ejidatarios y comuneros campesinos e indígenas, crece por todo México donde hay identificados 23 depósitos minerales gigantes, lo que ubica al país entre los 12 mayores productores del mundo en por lo menos 18 minerales.

Aprovechando la obsoleta ley minera, la ausencia de fianzas, la ridícula política fiscal y la debilidad de las normas ambientales y de seguridad, la explotaciones mineras a gran escala, "a cielo abierto", remueven cerros, rellenan barrancas, destruyen sembradíos, desplazan pueblos, envenenan manantiales, ríos y cuencas. Y cuando abandonan sus fundos, sólo dejan en nuestros pueblos su rastro de destrucción, enormes tiraderos de desechos y residuos, tierras estériles, aguas contaminadas, enfermedad y desolación.

Ante las acciones comunitarias de organización y defensa para enfrentar los proyectos, la respuesta de las empresas y los gobiernos es el hostigamiento y la represión. La naturaleza insustentable de la minería a gran escala, y su irresponsable expansión y fomento vuelve a registrar etnocidio, migración forzada, envenenamientos masivos, ficticios conflictos de límites territoriales, grandes y trágicos accidentes, por la irresponsable violación de normas de seguridad y de manejo de explosivos, hidrocarburos y tóxicos.

Bajo esta situación intolerable y devastadora, las organizaciones reunidas en Temacapulín decidimos organizarnos en una red nacional de los afectados directos o indirectamente por la minería, que nos permita unir fuerzas y fortalecer la defensa de la autonomía y soberanía de los pueblos sobre nuestros territorios, comunidades, y recursos naturales, que a partir de hoy denominamos Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema). *Declaración de Temacapulín, Jalisco, México, junio de 2008*



El hambre de ganancias de las transnacionales

Sebastián Valdomir, REDES-AT, Uruguay. Los resultados de la reciente Cumbre de la FAO relacionada con la llamada "crisis alimentaria" global fueron muy negativos. No sólo los gobiernos se abstuvieron de asumir compromisos concretos para solucionar las causas de dicha crisis, sino que, en sus diversos mensajes, promovieron vías que han demostrado ser, una y otra vez, las causantes de los desastres alimentarios a escala global. La solución —según varios gobiernos latinoamericanos— es más libre comercio y reproducción ampliada del capitalismo agrícola. Así, los principales promotores del libre comercio global aprovecharon la grave crisis alimentaria para afirmar que el mejor remedio sería concluir exitosamente y cuanto antes las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC, con un acuerdo que incluyera la liberalización profunda del comercio agrícola internacional. En ese coro reportaron Pascal Lamy, director general de la OMC, Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, Dominique Strauss Kahn, director general del Fondo Monetario Internacional y Mariann Fischer Boel, comisaria de Agricultura de la Unión Europea, entre otros.

Según ellos, llegar a un acuerdo en las negociaciones de la OMC ayudaría a "estabilizar" la situación de total desajuste de los precios de los alimentos, y a dar "garantías" a los países que son importadores netos de alimentos, de que este tipo de situaciones no se volverán a producir. Un acuerdo en el marco de la OMC, dicen sus promotores, ayudará a "disciplinar" los mercados internacionales de especulación financiera instalados en varios segmentos de las cadenas agroalimentarias globales.

En los hechos, tal acuerdo agrícola reforzará el poder de los actores dominantes del comercio internacional de alimentos —las transnacionales agroalimentarias— pues implicará la reducción general de los aranceles e impuestos a las importaciones alimentarias, el fin de las medidas proteccionistas y las ayudas internas a la producción local de comida.

No extraña que los mandos de las instituciones intenten convencer al mundo de las bondades de la receta del libre comercio. Ése es su trabajo. Pero sorprende que las posiciones de países como Argentina, Brasil, México, Ecuador o Uruguay en la reciente Cumbre de la FAO (3 a 6 de junio), son igualmente llamados en favor de un acuerdo en la Ronda de Doha tan entusiastas como los de los líderes del FMI, el BM y la OMC.

Estos países latinoamericanos son grandes productores de alimentos pero mantienen inmensas deudas internas con sus propias poblaciones, por la mala distribución de la riqueza, el casi nulo acceso a la tierra y la falta de soberanía alimentaria, mientras promueven una mayor liberalización comercial.

Cristina Fernández, presidenta argentina, identifica como causas de la crisis alimentaria los problemas de acceso y distribución de alimentos, las políticas proteccionistas de los países centrales y la fuerte concentración de poder en los mercados internacionales, unos cuantos actores corporativos que operan el sector agroalimentario con gran especulación.

Según ella, "hay un doble estándar, es como que de los países centrales se emiten mensajes acerca del libre comercio, de no proteccionismo, pero en los casos concretos y en las políticas concretas desde hace décadas, los países en proceso de desarrollo tenemos fuertes dificultades para acceder a los mercados".

Así, la presidenta afirma que existe poco "libre comercio real", y los países en desarrollo tienen dificultades en acceder a los mercados internacionales con sus productos primarios. "La segunda cuestión es reorientar a través de los organismos multilaterales de crédito, las inversiones hacia aquellos países que podemos ser y somos grandes productores de alimentos pero que también hemos incorporado en la producción de alimentos, en la producción agrícola, fuerte tecnología" (ver www.fao.org, para todas las citas de los funcionarios latinoamericanos en la Cumbre de FAO).

El gobierno de Brasil plantea algo semejante: "la así llamada crisis mundial de los alimentos es, sobre todo, una crisis de oportunidades y de distribución" afirma el presidente Lula. "Brasil, como potencia agrícola, está comprometido con el aumento de su producción… La superación de las trabas actuales requiere, evidentemente, la conclusión exitosa… de la Ron-





da de Doha. Un acuerdo que deje de contemplar el comercio agrícola como una excepción a las reglas y permita a los países más pobres generar renta con su producción y su exportación".

Insiste Lula, "si el mercado agrícola europeo no se abre a los productos agrícolas de los países pobres será muy difícil llegar a un acuerdo… Si los países ricos no disminuyen los subsidios agrícolas que otorgan a sus productores, los países pobres muy difícilmente podrán ser competitivos".

La posición del gobierno de México —expresada en la Cumbre de FAO por el secretario de Agricultura Alberto Cárdenas— es muy conocida: "Hoy más que nunca los países en desarrollo requieren mercados justos, abiertos, equitativos, con reglas y disciplinas claras, de otra manera no podrán adquirir alimentos básicos, poniendo en mayor riesgo la estabilidad de muchos países".

Cárdenas explica que el presidente Calderón emitió 19 medidas "para apoyar las economías de los mexicanos más pobres". Algunas son: la reducción drástica de los altos aranceles de maíz blanco y amarillo, arroz, frijol, trigo, soya y leche en polvo, y la reducción de los aranceles a la importación de fertilizantes y componentes químicos.

Miguel Toma, del gobierno uruguayo, afirma que "una conclusión exitosa en materia agrícola de la Ronda de Doha tendrá efectos positivos en la seguridad alimentaria mundial. La disminución de aranceles, la eliminación de los subsidios a las exportaciones y la reducción significativa de medidas de ayuda interna que distorsionan la producción y el comercio por parte de países desarrollados, redundará en una reforma fundamental del mercado agrícola mundial… los países productores eficientes tendrían las garantías necesarias para realizar inversiones que aseguren una expansión considerable de su producción y oferta exportable".

La ministra de Agricultura Marigen Venegas, de Chile, asegura que se debe "eliminar el proteccionismo y los subsidios que los países desarrollados aplican a sus agriculturas y que distorsionan el comercio agrícola internacional. El crecimiento de los países en desarrollo necesita de más y mejor comercio agrícola, un comercio internacional con reglas claras y justas".

El ministro ecuatoriano de Agricultura, Walter Poveda, dijo que la crisis alimentaria requiere que los países sean "cada vez con menos barreras para el comercio y fronteras más abiertas para la fluidez de productos agrícolas en el mundo, principalmente desde aquellos países con mayores limitaciones técnicas y de comercio exterior hacia los países desarrollados".

Una apertura de los mercados agrícolas de acuerdo a lo que apunta la Ronda de Doha generará mayor volatilidad de los precios de los productos básicos, contra lo cual los gobiernos del sur no conservan ningún tipo de instituciones de regulación o defensa de la producción local de alimentos, desmantelados por años de liberalización comercial a lo largo de los años noventa, a través del Acuerdo de Agricultura de la Ronda Uruguay del GATT y los tratados de libre comercio regionales y bilaterales, más los tratados de protección de inversiones.

En los países del sur global, los mecanismos y modalidades de intervención directa de los gobiernos sobre los mercados y la producción agrícola como los impuestos a la exportación, mecanismos de salvaguardia y aranceles a las importaciones fueron erradicados como mala palabra por el neoliberalismo en nombre del libre comercio. Esto mismo es lo que ahora precisamente se pretende establecer con un acuerdo global de libre comercio en la OMC. Aprovechando esto, no han cesado de incrementar sus ganancias las empresas transnacionales de la agroalimentación.

Contrariamente a lo que los promotores de la Ronda de Doha de la OMC manifiestan públicamente, nada de lo que se negocia en este marco apunta a colocar reglas concretas para regular los mercados financieros, ya que por el contrario, Estados Unidos y la Unión Europea presionan ya para que nada intervenga en los movimientos de los capitales a escala global.

El contexto está hecho a la medida de los intereses de las agroempresas transnacionales, y es ampliamente aprovechado por ellas como lo prueban las obscenas tasas de ganancias divulgadas en los momentos mas críticos de la crisis alimentaria actual.

La "crisis del campo" y el síndrome de Estocolmo en la sociedad argentina

Carlos A. Vicente, GRAIN. Varias actitudes de los principales actores públicos en la "crisis del campo" en los últimos meses (la "gente del campo", los "pequeños productores", los medios de comunicación, la gente de clase media, algunos sectores de la izquierda, el gobierno) produce fuerte desconcierto por las actitudes, reacciones y contradicciones que día a día sembraron una de las peores crisis de los últimos años en la sociedad argentina.

Esta situación invita a pensar en las razones de tremendo desbarajuste y a prestar atención a los innumerables análisis publicados. Más allá de la certeza y agudeza de algunos textos, en las últimas semanas muchos pensamos que faltaba una pieza en el rompecabezas y vez tras vez nos vino a la cabeza la idea de una sociedad viviendo el "síndrome de Estocolmo".

Qué es el Síndrome de Estocolmo. El Grupo ETC lo definió en un documento del 2002, donde decía que "poco después de la histórica conferencia de Estocolmo, un robo de banco con una situación de rehenes en esa ciudad acaparó los encabezados de la prensa. El furor de los medios no se debió a que hubiera rehenes sino a que, cuando fueron liberados, no querían abandonar a sus captores. Dos de las cuatro víctimas fueron eventualmente arrebatadas a sus héroes bandidos". Desde entonces, los siquiatras denominan a este fenómeno como el *síndrome de Estocolmo*. La teoría afirma que tras un determinado tiempo de depender del secuestrador, por instinto el cautivo se vinculará con éste. En junio de 2002, Camila Montecinos describió el *síndrome de Estocolmo* como "un fenómeno político en las relaciones entre el opresor y el oprimido".

Esta figura, desde el punto de vista político, sienta a la perfección lo que estamos viviendo en Argentina. Porque claramente hay un "secuestrador": son las *grandes corporaciones del agronegocio* que tienen maniatada a toda la sociedad argentina sin que ésta se anime a dar una respuesta contundente.

Un secuestrador que tiene sus cómplices en los grandes terratenientes y los *pooles* de siembra que obtienen ganancias espectaculares a costa de todos los trabajadores argentinos destruyendo nuestros suelos, contaminando el país, desplazando a poblaciones rurales y dejando de producir alimentos. Y que también tiene sus socios en los grandes medios de comunicación que deforman la realidad hasta el hartazgo por defender estos poderosos intereses.

Estos socios no dejan de ser esclavos de los señores todopoderosos de la agroempresa que manejan hoy el mundo a su antojo y que mañana pueden partir con sus semillas transgénicas a otros puertos dejando un país devastado y sin rendir cuenta alguna de los daños.

Más evidencia del "síndrome" es la participación de la Federación Agraria Argentina en las protestas del "campo". Los pequeños y medianos agricultores (no tan pequeños muchos de ellos) salieron abiertamente a aliarse a quienes siempre han sido sus opresores, que llevaron en las últimas décadas al cierre de miles de establecimientos agropecuarios y a un nivel inédito de concentración de la tierra (trágico si se consideran las superficies manejadas por los *pooles* de siembra). Quienes hasta hace unos meses cuestionaban esta problemática, hoy se han convertido en la "mano de obra" para los piquetes rurales. Y del discurso crítico a la concentración de la tierra, la lucha por una agricultura con agricultores y la búsquedas de alianzas con sectores campesinos, pasaron sin escalas a defender los intereses de aquellos a quienes sin duda quieren emular.



Buena parte de la sociedad argentina supo ponerse la "escarapela" del campo e identificando confusamente la "argentinidad" con la soja (*la argentinidad al palo*, diría la Bersuit) no dudaron en salir a defender estos intereses corporativos con carteles que inundan tristemente la ciudad de Marcos Paz, o colman el monumento a la Bandera en Rosario. Prisioneros del agronegocio, no dudan en defenderlo aunque durante las últimas décadas hayan tenido que ver día a día cómo los alimentos se encarecen y se hacen más inaccesibles para la mayoría de la población.

Y el gobierno argentino, políticamente activo durante las últimas décadas en abrirse a este modelo de monocultivos transgénicos de exportación y que hasta hace unos meses tenía como uno de sus principales aliados a Gustavo Grobocopatel, Rey de la Soja —al punto de delegarlo para llevar la soja a la bolivariana República de Venezuela—, es también un prisionero enamorado de su opresor. Basta como muestra que acaba de aprobar un nuevo maíz transgénico que incorpora ya tres eventos (resistencia a glifosato, resistencia a glufosinato y toxina Bt). Más monocultivo, más agroquímicos, mayor dependencia de las corporaciones. Todo lo que públicamente critica y expresa se debe cambiar.

El síndrome de Estocolmo tiene una salida. Comprender quiénes son los opresores y enfrentarlos. Este es el gran desafío pendiente.

Las transnacionales: ¡culpables!

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), fundado por Bertrand Rusell en los años sesenta, sesionó en Lima, Perú para dictaminar sobre empresas europeas en América Latina y resolvió “sancionar moral y éticamente” a las empresas transnacionales así como “conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la Unión Europea”. La sanción del TPP abarca también, expresamente, “a las corporaciones multinacionales con capitales privados y estatales de origen europeo”.

El dictamen final del TPP se dio a conocer en la clausura de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas III, paralela a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de Unión Europea, América Latina y el Caribe.

En las sesiones del TPP, se presentaron más de veinte casos contra empresas transnacionales europeas, denunciadas en audiencia pública por organizaciones sociales y de trabajadores, comunidades rurales y nacionalidades indígenas de América Latina y el Caribe.

El dictamen del TPP anuncia además la decisión de pedir “al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe un Relator Especial para que a la brevedad posible presente un informe a la Asamblea General que contenga la propuesta de caracterizar el concepto de deuda ilegítima, ecológica e histórica, así como la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en contra de las personas y de los pueblos, por parte de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales”.

El dictamen también exhorta a los Estados y gobiernos de América Latina y el Caribe a que “se garantice la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados, impidiendo la privatización de los recursos fundamentales para la vida como agua, aire, tierra, semillas, patrimonio genético y asegurando el acceso universal a los servicios públicos” y que “se asegure el acceso rápido y eficiente a la justicia y el respeto y aplicación prioritario de las convenciones, pactos internacionales, declaraciones y normas de la OIT y en general de los derechos humanos, ambientales y de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas”.

El TPP “reconoce la importancia, la dificultad y los riesgos inherentes asociados a las luchas de los movimientos sociales, campesinos, de trabajadores e indígenas, y otras organizaciones de base. Se compromete además a continuar acompañando con sus competencias y trabajo las violaciones de los derechos de los pueblos por las empresas transnacionales, los Estados y las instituciones internacionales y de construcción de alternativas”.



Perú: Alan García decreta destruir las comunidades

En un boletín de prensa fechado en mayo, Miguel Palacín Quispe, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) alertó contra el nuevo decreto 1015 emitido por el gobierno de Alan García, “como instrumento para despojar los territorios ancestrales y arrasar las formas tradicionales de trabajo, economía y organización: en resumen destruir a las comunidades indígenas, algo que ni la dictadura de Alberto Fujimori, en la década pasada, se atrevió a hacer”.

El decreto legislativo 1015 modifica la ley 26505 (Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas), que *exigía como requisito para la venta de tierras comunales el voto aprobatorio de dos terceras partes de los miembros de comunidad*. La norma modificatoria reduce este requisito *al 50% más uno de los asistentes a la asamblea comunal*.

El decreto 1015 desconoce el requisito del quórum reglamentario que exigen todas las normas legales. Si una comunidad de mil miembros hace una “asamblea” con cien personas, bastará el voto de 51 de ellas para disponer de los territorios comunales.

Se añade que quienes no son miembros de la comunidad, podrán pedir la titulación de tierras con el mismo requisito: el 50% más 1 de los asistentes a la asamblea.

Esto implica un grave riesgo, porque las empresas extractivas que invaden territorios comunales pueden apropiarse “legalmente” de esas tierras amañando “asambleas”.

El decreto 1015 es un grave atentado contra las comunidades campesinas por parte de un gobierno cada vez más entregado a los apetitos de las empresas transnacionales que saquean nuestros bienes naturales.

La CAOI convoca a la solidaridad internacional para detener esta amenaza privatizadora y destructiva de las comunidades campesinas e indígenas en el Perú.

Breve retrato de la papa transgénica

Elizabeth Bravo, Acción Ecológica. El Parlamento Andino declaró en 2006, a la región andina (específicamente los países de la Comunidad Andina), libre de papa transgénica, por la importancia cultural y social de este cultivo en las poblaciones andinas, y porque el centro de origen y diversidad de la papa es esta región.

La diversidad genética de papa es tan alta ahí, que dentro de un *ayllu* en Bolivia se puede encontrar hasta 70 variedades de papas entre amargas, semi amargas y dulces. Estudios recientes han demostrado que existen 235 especies de papas, entre silvestres y cultivadas, cada una con cientos de variedades.

El peligro de introducir papa transgénica en la región estriba en que la mayoría de las variedades nativas de papa pueden entrecruzarse entre sí, y por supuesto con papas transgénicas. Los siguientes factores que favorecen el flujo de genes en la papa son la coincidencia en la floración, la presencia de polinizadores, la sobrevivencia de semilla sexual en los campos de cultivos, la habilidad de propagación mediante cruces naturales entre especies silvestres y cultivadas dando lugar a semilla fértil, la germinación y sobrevivencia espontánea que da lugar a variaciones en especies silvestres y cultivadas e introgresión.



A pesar que algunas pruebas de campo bajo condiciones controladas pretenden demostrar la ausencia del riesgo de contaminación genética de las variedades nativas de papa (cultivadas o silvestres) con material transgénico, el riesgo de contaminación es muy amplio por los factores de flujo de genes mencionados, los cuales se exacerban en la complejidad ecológica y social existentes en la región andina, donde se practica el intercambio de papa entre comunidades muy distantes.

Existen ya algunas papas transgénicas que están listas para salir al mercado.

El gobierno sudafricano ha aprobado un proyecto financiado por Estados Unidos para cultivar papas modificadas genéticamente en seis lugares secretos del suelo africano. En Estados Unidos se cultivó una papa similar pero fue sacada del mercado debido a la resistencia de los consumidores. Esta papa transgénica fue desarrollada por el Instituto Internacional de la Papa, en su sede en Perú.

Esta papa transgénica está manipulada para resistir los ataques de la polilla de la papa (*Phthorimaea operculella*), la misma que puede ser controlada con el uso de variedades de papa nativa resistentes a la polilla, o con un buen sistema de manejo del cultivo.

Hay investigación que demuestra que en el campo, las polillas de la papa no dañan el tubérculo, sino a las hojas, pero esto no tiene efecto en el rendimiento del tubérculo. Es durante el almacenamiento cuando la modificación genética se vuelve efectiva, por lo que introducir esta papa genéticamente modificada en el mercado, beneficiaría sobre todo a los grandes comercializadores. Se ha demostrado que estas polillas se alimentan de otras *Solanaceae* y pueden convertirse en un serio riesgo para las especies agrícolas y silvestres, que son de suma importancia. Hay preocupaciones de orden científico en relación a esta papa, como la presencia de genes de resistencia a antibióticos.

Otra papa transgénica, con resistencia al hongo que produce la enfermedad del tizón tardía, o lancha de la papa, está en la lista de espera para ser liberada en el campo. Es una papa desarrollada por la empresa alemana BASF. Esta papa transgénica ha sido modificada con un gen de una variedad silvestre de México, *Solanum bulbocastanum* (emparentada con la papa y que es resistente al hongo que produce la enfermedad). El marcador genético utilizado es un gen con resistencia a herbicidas.

A pesar de que se habría podido recurrir a otras técnicas para controlar al hongo, se prefiere la manipulación genética, porque la resistencia puede ser transmitida a líneas comerciales de manera más rápida. Aun cuando se están introduciendo genes de especies relativamente emparentadas, en estas papas transgénicas se inserta un cóctel de genes, cuya expresión puede generar una serie de impactos a la salud, al ambiente, y a la biodiversidad local.

Ecuador libre de transgénicos

A principios de julio, en una decisión histórica que sienta un precedente en la lucha por la soberanía alimentaria, contra los cultivos transgénicos y contra el modelo agroindustrial responsable de incalculables daños a la libertad, la cultura, los saberes, la biodiversidad, el ambiente y la humanidad, la Asamblea Constituyente de Ecuador, que durante meses ha intentado conjuntar y consensar una pluralidad de voces para modificar sustancialmente la Constitución que rige en el país, aprobó tres artículos cruciales relativos a la soberanía alimentaria.

En el primero, "El Estado ecuatoriano reconoce, garantiza y promueve el derecho de las personas, las comunidades y los pueblos a la soberanía alimentaria", y la sustenta en la "pequeña y mediana producción campesina y familiar y en la pesca".

En el segundo, al establecer las obligaciones relacionadas con dicha soberanía, el apartado 8 dice a la letra: "Se declara al Ecuador como país libre de cultivos y semillas transgénicas. Sólo por excepción y en caso de interés nacional debidamente fundamentado por el presidente de la República y aprobado por mayoría del pleno de la Asamblea Nacional se podrán introducir cultivos y semillas genéticamente modificadas. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad el uso y el desarrollo de la biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización". Si bien esta declaración no es todo lo que hubieran esperado las miles de redes que en Ecuador y en el mundo luchan contra la nociva liberación de transgénicos, sienta un precedente para que en las legislaciones latinoamericanas se prohiban los transgénicos y en la población general se profundice el debate para rechazarlos del todo. Cabe resaltar la lucha constante de organizaciones como Acción Ecológica, que no han cejado en alertar de las terribles implicaciones de la liberación de los organismos genéticamente modificados y la experimentación con los mismos.

Como señala Silvia Ribeiro, lo realmente notable es que además se haya podido incluir un párrafo donde se



prohiben "los productos agrotóxicos que causen daños a la salud y al ambiente" lo que de aplicarse frenaría por completo la dañina actividad agroindustrial; que se refuerce el libre intercambio de semillas (en un momento en que por todo el mundo se hace ilegal esa práctica), y se prohiba "el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes".

Con las presiones a las que ha estado sometida la Asamblea Constituyente, y con los candados que el equipo ministerial del presidente y él mismo, a voz en cuello, han puesto sobre otros artículos, no queda sino desear que la fuerza social haga que éstos se mantengan y la sociedad ecuatoriana los haga valer.



Los pueblos tejen resistencia

Presentamos algunos fragmentos relevantes de la Declaración de la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas III, celebrada en Lima, Perú en mayo de este año.

...Rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos.

La estrategia de la Unión Europea *Europa Global : Competir en el mundo,* supone profundizar las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social. Esto tiene implicaciones en ambas regiones.

...Esta estrategia reproduce el esquema de los Tratados de Libre Comercio que han suscrito la mayoría de países de la región con Estados Unidos y van más allá de las políticas de la OMC que rechazamos. Los recursos naturales de estos países están siendo explotados indiscriminadamente, desplazando a comunidades enteras, devastando la biodiversidad, agotando las fuentes hídricas, y pauperizando la mano de obra, y en ello tienen mucha responsabilidad las multinacionales europeas. América Latina ha sido víctima secular del saqueo de las transnacionales... varios gobiernos que siguen las recetas del libre comercio



estimulan la fragmentación de la región, los enfrentamientos nacionales y las contradicciones entre ellos.

Los Acuerdos de Asociación que ha firmado la Unión Europea con México y Chile han profundizado las desigualdades y muestran el camino que seguirán quienes firmen estos acuerdos en Centroamérica, la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, cuyas negociaciones se quiere resucitar. Para los países del Caribe, estos acuerdos, recientemente firmados, aumentarán la vulnerabilidad y dependencia de sus economías, al mismo tiempo que fracturan la dinámica de integración subregional.

En el momento en que en Lima los gobiernos hablan de cohesión social, cambio climático y reducción de la pobreza, conviene recordar que la principal causa de desigualdad, polarización social, degradación ambiental y discriminaciones, es la primacía del mercado por sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de todas las garantías a las corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de desarrollo con la complicidad de los gobiernos. Las transnacionales actúan bajo un doble rasero apoyándose en las asimetrías que los Acuerdos de Asociación tienden a reforzar. En consecuencia, el discurso sobre Cooperación y Diálogo Político es la carnada que esconde el anzuelo de los intereses de esas corporaciones.

Frente a la crisis alimentaria que afecta a decenas de países, denunciamos la hipocresía y las políticas de las instituciones multilaterales que pretenden esconder sus verdaderas causas: el direccionamiento de la producción de los países a la exportación, la pérdida del papel del Estado en la regulación alimentaria y la conversión de los alimentos en fuente de especulación financiera, todo ello como resultado de las políticas de "libre comercio". Es inadmisible que se proponga más liberalización y desprotección. La producción masiva de agrocombustibles agrava las ya difíciles condiciones de vida de millones de habitantes. Rechazamos una vez más esta pretendida salida a la crisis energética y climática.

Reiteramos que es posible una integración distinta basada en la libre determinación de los pueblos, el respeto al ambiente, a los derechos humanos y a los procesos democráticos… Esto supone el fortalecimiento de la cooperación en todos los ámbitos entre los pueblos, el reforzamiento de la solidaridad, el fin de toda forma de discriminaciones y la superación de prácticas violatorias de la soberanía de los países…

Saludamos las acciones de nacionalización de empresas estratégicas para el desarrollo nacional y los recursos naturales, que pertenecen a los pueblos, no a las transnacionales, como por ejemplo la de la empresa boliviana de telecomunicaciones ETI/Entel. Llamamos a los gobiernos que promuevan políticas progresistas a sumarse al proceso de transformación que impulsamos. Rechazamos las desafiantes intervenciones de EUA y la Unión Europea contra la soberanía de los pueblos… Llamamos la atención sobre la dramática situación de Haití, resultado de décadas de expoliación, agravada por la actual ocupación militar. Denunciamos la política complaciente de la Unión Europea con el gobierno de Colombia.

La única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en torno a la defensa de su bienestar y fortalecer la resistencia y movilización contra las políticas neoliberales. Ella debe nutrirse de los aportes de mujeres, pueblos originarios, campesinos y demás fuerzas sociales que, con su presencia masiva en la Cumbre Social, dan ejemplo de combatividad y elaboración de alternativas en búsqueda de un progreso sustentado en la armonía con la naturaleza, los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación.

Exigimos a los gobiernos atender efectivamente las demandas de los pueblos por construir otro tipo de relaciones entre las regiones, basadas en la superación del modelo de mercado. Hacemos un llamado a la población a no dejarse engañar más por gobiernos autoritarios que pretenden criminalizar la justa protesta civil. Instamos a los habitantes de América Latina, el Caribe y Europa a sumarse a la fuerza cada vez mayor de organizaciones que buscan un mundo mejor para todos, y así estar a la altura de los desafíos que hoy enfrenta la humanidad.

Amigos: *Biodiversidad, sustento y culturas* inició desde su número 53 una nueva etapa de colaboración entre organizaciones de América Latina para llegar a más lectores de nuestro continente. Desde entonces nuestra revista se imprime en Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y México a partir del trabajo coordinado de REDES-AT, GRAIN, Acción por la Biodiversidad, la Campaña de la Semilla de Vía Campesina, Acción Ecológica, el Grupo Semillas de Colombia y el Grupo ETC.

Biodiversidad, sustento y culturas es una revista trimestral (cuatro números por año). Las organizaciones populares, las ONG y las instituciones de América Latina pueden recibirla gratuitamente. El costo anual para los demás sucriptores es de 25 dólares. Por favor envíen sus datos con la mayor precisión posible para simplificar la tarea de distribución de la revista.
Los datos necesarios son:

País, organización, nombre y apellido, dirección postal: código postal, ciudad, provincia, departamento o estado.
(Correo electrónico, teléfono y/o fax, si se cuenta con ellos.)

Envíen por favor su solicitud a BIODIVERSIDAD, REDES-AT, San José 1423 11200, Montevideo, Uruguay. Teléfonos: (598 2) 902 23 55/908 2730.
biodiv@redes.org.uy/biodiv.suscripciones@redes.org.uy


REDES
Amigos de la Tierra Uruguay


GRAIN


Acción Ecológica


semillas


etc group


Campaña
de la Semilla


LA VIA CAMPESINA


acción por la biodiversidad • acción por la biodiversidad •


red de coordinación en
biodiversidad